

# Miradas a la gestión del PCI de América Latina: avances y perspectivas

Estados del arte sobre las políticas públicas para la salvaguardia del PCI de los países miembro del CRESPIAL



Organización  
de las Naciones Unidas  
para la Educación  
la Ciencia y la Cultura



Patrimonio  
Cultural  
Inmaterial



Centro Regional para  
la Salvaguardia del Patrimonio  
Cultural Inmaterial de América Latina  
bajo los auspicios de la UNESCO



# Miradas a la gestión del PCI de América Latina: avances y perspectivas

Estados del arte sobre las  
políticas públicas para  
la salvaguardia del PCI  
de los países miembro  
del CRESPIAL



Organización  
de las Naciones Unidas  
para la Educación  
la Ciencia y la Cultura



Patrimonio  
Cultural  
Inmaterial



Centro Regional para  
la Salvaguardia del Patrimonio  
Cultural Inmaterial de América Latina  
bajo los auspicios de la UNESCO

Miradas a la gestión del PCI de América Latina: avances y perspectivas  
Estados del arte sobre las políticas públicas para la salvaguardia  
del PCI de los países miembro del CRESPIAL

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina – CRESPIAL  
Av. José Gabriel Cosío #407, Urbanización Magisterial, primera etapa, Cusco  
Cusco, Perú  
Teléfono: +51 84 231191  
[www.crespial.org](http://www.crespial.org)

Primera edición, febrero de 2019

---

**Adriana Molano Arenas**  
Directora General del CRESPIAL

Diseño de carátula y diagramación de interiores:  
Kilka Diseño Gráfico · [kilkadg.com](http://kilkadg.com)

Corrección de estilo: Ricardo Vásquez

Cuidado de edición: Maite Zeisser Gutiérrez  
y Pedro Ramos Chávez

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional  
del Perú N° 2019-02456  
ISBN

Queda prohibida la reproducción total o parcial  
de la presente publicación sin la autorización  
expresa del CRESPIAL


Impreso en (datos de imprenta).  
Febrero 2019  
Tiraje: 750 ejemplares

---



## TABLA DE CONTENIDO

Presentación	•	5
Apresentação	•	9
Introduction	•	13
Una mirada panorámica a la gestión del patrimonio cultural inmaterial en América Latina	•	17
Uma visão panorâmica da gestão do patrimônio cultural imaterial na América Latina	•	50
A Panoramic View of the Intangible Cultural Heritage in Latin America	•	82





Desde su creación, el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina (CRESPIAL), ha realizado un sostenido esfuerzo por mantener información pertinente y actualizada sobre el estado de la implementación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de UNESCO (Convención UNESCO 2003).

Los documentos contenidos en esta publicación se inscriben en la continuidad de dos publicaciones sobre los Estados del Arte que la preceden. La primera, en el año 2008<sup>1</sup>, contó con la participación de los siete países miembro hasta ese momento (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) y fue seguida en el año 2010<sup>2</sup>, por una nueva publicación a la cual se sumaron los dos nuevos integrantes del Centro (Paraguay y Uruguay).

Los Estados del Arte de cada país, junto con el balance general realizado por el Centro que acompañó cada una de las publicaciones mencionadas, se convierten en un instrumento comparativo en el tiempo de gran valor, el cual, a través del análisis de los instrumentos en materia de política cultural desarrollados por cada uno de los países, permite observar la trayectoria de éstos en relación a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (PCI).

Por otro lado, las preguntas que orientaron las primeras versiones (en los años 2008 y 2010) de los Estados del Arte reflejan, a su vez, indicadoras de la evolución misma en la manera de abordar este campo de gran complejidad. Los primeros trabajos se centraron en la pregunta crucial de cómo los países, a raíz de la ratificación reciente de la Convención UNESCO 2003, planeaban aterrizar en su legislación e institucionalidad dicho instrumento jurídico internacional. Progresivamente, las reflexiones giraron entorno a la voluntad de desarrollar las primeras medidas de salvaguardia que, en el caso de la mayoría de los países miembro del CRESPIAL en su momento, estaban centradas en la preocupación por registrar e inventariar las diversas manifestaciones presentes en sus territorios.

Dando continuidad a esta ruta institucional, en el año 2017, el CRESPIAL realizó nuevamente una actualización del estado de la implementación de

---

1 El Estado del Arte del Patrimonio Cultural Inmaterial, 2008,

2 Experiencias y políticas de salvaguardia del PCI en América Latina, 2010

la Convención UNESCO 2003. A diferencia de los trabajos anteriores, el ejercicio que presentamos a continuación está abordado desde el concepto de gestión del PCI, término que da cuenta de un abordaje más englobante de la salvaguardia que constituye una alternativa para ampliar su campo de acción.

A 15 años de la aprobación de la Convención UNESCO 2003, los documentos de cada país, elaborados desde una mirada crítica y propositiva, comparten las experiencias de los gobiernos y de la sociedad civil, brindando recomendaciones para seguir fortaleciendo los procesos nacionales e identificando los múltiples retos que aún enfrentan los gobiernos, las instituciones y los múltiples y diversos actores implicados.

La presente publicación representa para CRESPIAL una herramienta de conocimiento que esperamos, gracias a la información y análisis que provee sobre los avances, retos y oportunidades en cuanto a la implementación de la mencionada Convención, pueda contribuir al proceso de consolidación y aprendizaje de los diversos actores que participan en la gestión de la salvaguardia del PCI. De igual manera, buscamos que esta herramienta favorezca la toma de decisiones pertinentes para las futuras acciones y, sobre todo, contribuya con el aprendizaje cooperativo entre los países en la materia.

Es importante resaltar que los Estados del Arte nos brindan también una mirada sobre el panorama regional que, desde el CRESPIAL, nos lleva a alinear nuestro plan de trabajo con las realidades y necesidades de nuestros países. Sobre todo, nos ha permitido establecer nuevas perspectivas, actuales y futuras, para la salvaguardia del PCI en la Región (entendida como América Latina), gracias a la identificación de los desafíos y oportunidades que, si bien responden a experiencias nacionales históricas, complejas y únicas, encuentran puntos comunes entre sí.

Los documentos que integran la presente publicación, son el resultado de un largo proceso de trabajo de 7 meses que contó con la participación de 15 consultores independientes, uno por cada país miembro del CRESPIAL, una coordinadora académica, Luisa Fernanda Sánchez<sup>3</sup>, y el acompañamiento y

---

3 Antropóloga, Magíster en antropología social, Máster en sociología y Doctora en sociología del Instituto de Altos Estudios de América Latina IHEAL – Paris 3, se desempeña actualmente como profesora e investigadora del departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.



revisión permanente del equipo de la Secretaría Técnica del Centro. A través de un ejercicio de delimitación temporal, partiendo de las experiencias anteriores mencionadas, se realizó una vasta revisión documental de bibliografía y fuentes primarias, así como entrevistas a funcionarios y gestores en el campo. Este proceso fue efectuado por los consultores de manera independiente, en articulación con los Núcleos Focales<sup>4</sup> del CRESPIAL.

El proceso de recolección de la información y elaboración del balance de cada país estuvo orientado por la necesidad de abordar la dimensión participativa como una interrogante permanente en las iniciativas de salvaguardia del PCI. Esto responde a las numerosas demandas de los actores y comunidades locales, a las reflexiones que se decantan de los ejercicios realizados por la UNESCO y por el campo de los estudios críticos del patrimonio que, desde hace más de una década, han hecho un llamado a los países para que los procesos de salvaguardia sean comprendidos como ejercicios de ampliación de la democracia y de la gobernanza cultural.

Las dificultades a lo largo del proceso también fueron numerosas, dada la gran diversidad de conceptos manejados por los países, el volumen y dispersión de la información oficial y, particularmente, los diferentes enfoques y abordajes del tema participativo. El esfuerzo se enfocó en encontrar una línea directriz común, a través de una misma estructura narrativa, con el fin de que las reflexiones, interpelaciones y cuestionamientos que surgieron a raíz del análisis de los procesos particulares de cada país, alimentaran una reflexión más amplia sobre los desafíos de la salvaguardia del PCI.

Para facilitar esta lectura en perspectiva regional, se elaboró un documento de análisis crítico y transversal de los Estados del Arte de cada país, realizado por Luisa Fernanda Sánchez, consultora del CRESPIAL. Este documento introductorio nos brinda una mirada amplia y compleja de la región en lo que respecta a la implementación de la Convención UNESCO 2003, un proceso que, si bien ha contado con especificidades y desafíos particulares, encuentra numerosos puntos de intersección entre las diversas experiencias.

---

4 Son los representantes de instituciones gubernamentales de cada uno de los países miembros del CRESPIAL

En este documento de balance, también se aborda de manera detallada, cómo el campo del PCI está profundamente atravesado por los cambios políticos y económicos en cada país. Así, tomando como referente el último ejercicio realizado por el Centro en el 2010, se constata que el tema ha logrado un posicionamiento mayor en las agendas públicas, dado que las políticas para la salvaguardia del PCI se articulan tanto con problemas concretos en los territorios nacionales como con las apuestas de los escenarios globales.

Cada vez más, se incrementan las acciones intersectoriales desde la gestión del PCI con otros ámbitos tales como educación, salud, industrias culturales, turismo y más. Este crecimiento del campo se explica también en términos conceptuales, puesto que se ha logrado una mayor apropiación del concepto de PCI y, por ende, un cambio de paradigmas que ha implicado un tránsito hacia la salvaguardia.

Por último, tal vez uno de los más grandes aportes de esta publicación, ha sido el comprobar que los aprendizajes y respuestas de un país a los desafíos de la gestión del PCI pueden responder a las interrogantes y problemáticas de otro país, lo que abre importantes posibilidades de cooperación sur-sur y de planeación de estrategias conjuntas.

En un momento en el que nos enfrentamos a los desafíos del desarrollo sostenible y del ajuste de las democracias frente a las crisis políticas, económicas y sociales, el campo del PCI se vuelve un terreno privilegiado para encontrar respuestas y alternativas desde los procesos locales y comunitarios. Así, las diferentes iniciativas pueden fortalecer a los países en la construcción de una cultura de paz, gracias al reconocimiento y valoración de la diversidad desde un enfoque de derechos.

En este marco, el espacio de cooperación del CRESPIAL y su función misma como facilitador de acciones conjuntas entre los países, cobra aún más sentido en un tiempo en que necesitamos brindar respuestas locales a problemas globales. Por ello, nuestro trabajo y compromiso en fomentar la integración y cooperación regional para la salvaguardia del PCI, busca contribuir con el bienestar, dignidad y creatividad de las poblaciones de la región.

Desde a sua criação, o Centro Regional para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da América Latina (CRESPIAL), realizou um esforço contínuo para manter informações pertinentes e atualizadas sobre o estado da implementação da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO (Convenção UNESCO de 2003).

Os documentos contidos nesta publicação inscrevem-se na continuidade de duas publicações sobre os Estados da Arte que a precedem. A primeira, em 2008<sup>1</sup>, contou com a participação dos sete países membros até este momento (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru) e foi seguida, em 2010<sup>2</sup>, por uma nova publicação à qual os dois novos membros do Centro (Paraguai e Uruguai) se juntaram.

Os Estados da Arte de cada país e o balanço geral feito pelo Centro que acompanhou cada uma das publicações mencionadas, tornaram-se um instrumento comparativo no tempo de grande valor, que, através da análise dos instrumentos em matéria de política cultural desenvolvida por cada um dos países, permite observar sua trajetória em relação à salvaguarda do patrimônio cultural imaterial (PCI).

Por outro lado, as questões que orientaram as primeiras versões (2008 e 2010) dos Estados da Arte refletem, por sua vez, a própria evolução na maneira de abordar este campo altamente complexo. Os primeiros trabalhos focaram-se na questão crucial de como os países, após a recente ratificação da Convenção UNESCO de 2003, planejavam materializar em sua legislação e institucionalidade este instrumento jurídico internacional. Progressivamente, as reflexões giraram em torno do desejo de desenvolver as primeiras medidas de salvaguarda que, no caso da maioria dos países membros do CRESPIAL em seu momento, estavam focadas na preocupação em registrar e inventariar as diversas manifestações presentes em seus territórios.

Continuando com esta rota institucional, em 2017, o CRESPIAL realizou novamente uma atualização do estado da implementação da Convenção da UNESCO de 2003. Ao contrário de trabalhos anteriores, o exercício apresen-

---

1 *O Estado da Arte do Patrimônio Cultural Imaterial*, 2008,

2 *Experiências e políticas de salvaguarda do PCI na América Latina*, 2010

tado a seguir é abordado a partir do conceito de gestão do PCI, um termo que representa uma abordagem mais abrangente da salvaguarda, o que constitui uma possibilidade para ampliar seu campo de ação.

Após 15 anos da aprovação da Convenção da UNESCO de 2003, os documentos de cada país, elaborados com um olhar crítico e propositivo, compartilham as experiências dos governos e da sociedade civil, fornecendo recomendações para continuar fortalecendo os processos nacionais e identificando os múltiplos desafios que ainda enfrentam os governos, as instituições e os vários atores envolvidos.

Esta publicação representa para o CRESPIAL uma ferramenta de conhecimento que esperamos —graças à informação e análise que propicia sobre os progressos, os desafios e as oportunidades relativas à implementação dessa Convenção— possa contribuir ao processo de consolidação e aprendizagem dos vários atores envolvidos na gestão da salvaguarda do PCI. Da mesma forma, buscamos que essa ferramenta favoreça uma tomada de decisões pertinentes para as ações futuras e, sobretudo, contribua com a aprendizagem cooperativa entre os países sobre o assunto.

É importante ressaltar que os Estados da Arte também nos dão uma visão do panorama regional que, a partir do CRESPIAL, leva-nos a alinhar nosso plano de trabalho com as realidades e necessidades de nossos países. Especialmente, permitiu-nos estabelecer novas perspectivas, atuais e futuras, para a salvaguarda do PCI na Região (entendida como América Latina), graças a identificação dos desafios e oportunidades que, embora respondam às experiências nacionais históricas, complexas e únicas, encontram pontos comuns entres si.

Os documentos que compõem esta publicação, são o resultado de um longo processo de trabalho de 7 meses que contou com a participação de 15 consultores independentes, um por cada país membro do CRESPIAL, uma coordenadora acadêmica, Luisa Fernanda Sánchez<sup>3</sup>, e o acompanhamento e revisão permanente da equipe do Centro. Através de um exercício de demar-

---

3 Antropóloga, Mestre em Antropologia Social e Sociologia e Doutora em Sociologia pelo Instituto de Altos Estudos da América Latina IHEAL – Paris 3, atualmente é professora e pesquisadora no Departamento de Antropologia da Pontifícia Universidade Javeriana de Bogotá.

cação temporária, com base nas experiências anteriores mencionadas, foi realizada uma vasta revisão documental de bibliografia e fontes primárias, bem como entrevistas a funcionários e gestores no campo. Este processo foi realizado pelos consultores de forma independente, em articulação com os Núcleos Focais<sup>4</sup> do CRESPIAL.

O processo de coleta da informação e a elaboração do balanço de cada país estiveram orientados pela necessidade de abordar a dimensão participativa como um interrogante permanente das iniciativas de salvaguarda do PCI. Isso responde às inúmeras demandas dos atores e comunidades locais, às reflexões que surgiram a partir dos exercícios realizados pela UNESCO e pelo campo dos estudos críticos do patrimônio que, por mais de uma década, fizeram um chamado aos países para que os processos de salvaguarda sejam entendidos como exercícios de ampliação da democracia e da governança cultural.

As dificuldades ao longo do processo também foram numerosas, devido à grande diversidade de conceitos tratados pelos países, ao volume e à dispersão da informação oficial e, particularmente, aos diferentes enfoques e abordagens do tema participativo. O esforço concentrou-se em encontrar uma diretriz comum através da própria estrutura narrativa, de modo que as reflexões, interpelações e questionamentos que surgiram a partir da análise dos processos específicos de cada país, alimentassem uma reflexão mais ampla sobre os desafios de salvaguarda do PCI.

Para facilitar essa leitura em uma perspectiva regional, um documento de análise crítica e transversal dos Estados da Arte de cada país foi elaborado por Luisa Fernanda Sánchez, consultora do CRESPIAL. Este documento introdutório oferece-nos uma visão extensa e complexa da região com relação à implementação da Convenção da UNESCO de 2003, um processo que, embora tenha tido desafios particulares e especificidades, encontra numerosos pontos de intersecção entre as várias experiências.

Neste documento de balanço, também é abordado de forma detalhada, como o campo do PCI está profundamente atravessado por mudanças polí-

4 São os representantes das instituições governamentais de cada um dos países membros do CRESPIAL


ticas e econômicas em cada país. Assim, tomando como referência o último exercício realizado pelo Centro em 2010, é possível constatar que a temática vem ganhando uma posição maior nas agendas públicas, visto que as políticas para a salvaguarda do PCI articulam-se tanto com problemas concretos nos territórios nacionais como com apostas em cenários globais.

Cada vez mais, as ações intersetoriais aumentam a partir da gestão do PCI com outros âmbitos, como educação, saúde, indústrias culturais, turismo e muito mais. Esse crescimento do campo também é explicado em termos conceituais, uma vez que alcançou uma maior apropriação do conceito de PCI e, portanto, uma mudança de paradigma que favoreceu a transição de uma visão folclorizante das expressões culturais para uma abordagem de salvaguarda.

Finalmente, talvez uma das maiores contribuições desta publicação tenha sido comprovar que as aprendizagens de um país, assim como as respostas aos desafios da gestão do PCI podem responder as interrogantes e problemáticas de outro país, o que abre importantes possibilidades de cooperação sul-sul e de planejamento estratégico conjuntos.

Em um momento em que enfrentamos os desafios do desenvolvimento sustentável e do ajuste das democracias face às crises política, econômica e social, o campo do PCI torna-se um terreno privilegiado para encontrar respostas e alternativas a partir dos processos locais e comunitários. Assim, as diferentes iniciativas podem fortalecer os países na construção de uma cultura de paz, graças ao reconhecimento e valorização da diversidade sob o enfoque de direitos.

Nesse âmbito, o espaço de cooperação do CRESPIAL e sua própria função como facilitador de ações conjuntas entre os países, faz ainda mais sentido em um momento em que precisamos dar respostas locais a problemas globais. Portanto, nosso trabalho e compromisso de promover a integração e a cooperação regional para a salvaguarda do PCI, visando contribuir para o bem-estar, a dignidade e a criatividade das populações da região, continua ainda mais vigente.



Since its creation, the Regional Center for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of Latin America (CRESPIAL) has made a sustained effort to keep pertinent and up-to-date information relating the status of the implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of UNESCO (UNESCO 2003 Convention).

The documents contained in this publication are follow-ups of the two previous publications on the States of the Art. The first one, in 2008<sup>1</sup>, featured the participation of the seven State Parties until then (Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, and Peru), and it was followed<sup>2</sup> by a new publication in 2010 in which the two new members of the Center (Paraguay and Uruguay) joined.

The State of the Art of each country along with the general stocktaking, done by the Center in each of the mentioned publications, have become a truly valued tool of comparison over time. It is a tool that, through the analysis of the cultural policy instruments developed by each country, allows us to analyze their trajectory in relation to the safeguarding of intangible cultural heritage (ICH).

On the other hand, the questions that guided the first editions of the States of the Art (in 2008 and 2010) reflect the evolution of the way of approaching this highly complex field. The first works focused on the crucial question of how countries, as a result of the recent ratification of the UNESCO 2003 Convention, planned to merge this international legal instrument into their legislation and institutional framework. Gradually, the reflections revolved around the desire to develop the first safeguarding measures that, in the case of most CRESPIAL's member states at the time, were focused on recording and inventorying the various manifestations existing in their territories.

Giving continuity to this institutional route, CRESPIAL again updated the status of the implementation of the UNESCO 2003 Convention in 2017. Unlike the previous works, the exercise that we present below is addressed from the concept of ICH management, a term that shows a more encompassing

---

1 *The State of the Art of Intangible Cultural Heritage, 2008,*

2 *Experiences and Policies to Safeguard ICH in Latin America, 2010*

approach to safeguarding, which constitutes a possibility to expand its field of action.

After 15 years of the UNESCO 2003 Convention approval, the documents of each country share the experience of governments and civil society from a critical and proactive perspective. Thus, they provide recommendations to continue strengthening national processes and identifying the multiples challenges still faced by governments, institutions and the various actors involved.

To CRESPIAL, this publication is a tool for knowledge. A tool that we hope can contribute to the process of consolidation and learning of the various actors involved in the management of ICH safeguarding. All of this thanks to the information and analysis that it provides with respect the advancements, challenges and opportunities regarding the implementation of the aforementioned Convention. Similarly, we seek for this tool to encourage the making of pertinent decisions for future actions and, particularly, to contribute to the cooperative learning among the countries in the matter.

It is important to highlight that the States of the Art also give us an outlook on the regional panorama. A panorama that makes us, in CRESPIAL, align our work plan with our countries realities and needs. Mainly, it has allowed us to establish new current and future perspectives with the aim of safeguarding ICH in the region (understood as Latin America) thanks to the identification of the challenges and opportunities that, although respond to historical, complex and unique national experiences, share common ground.

The documents that form this publication are the result of a long 7 month work process that involved the participation of 15 independent consultants (one for each of CRESPIAL's member states), an academic coordinator, Luisa Fernanda Sánchez,<sup>3</sup> and the support and permanent review of the Center's team. A vast documentary review of bibliography and primary sources was made through a temporary delimitation exercise based on the aforementioned experiences, as well as interviews with officials and managers in the

---

3 Anthropologist, Master in Social Anthropology, Master in Sociology and Doctor in Sociology from the Institute of Latin American IHEAL - Paris 3. Currently, she works as a professor and researcher in the Anthropology Department at Pontifical Xavierian University in Bogota.



field. This process was carried out independently by the consultants in coordination with CRESPIAL<sup>4</sup> Focal Centers.

The process of gathering information and doing each country's stocktaking was guided by the need of treating the participatory dimension as a permanent question in ICH safeguard initiatives. This answers many of the request made by the actors and communities, and to the reflections that highlight the exercises done by UNESCO and the field of critical studies of heritage that, for more than a decade, have called countries so that safeguarding processes can be understood as exercises to expand democracy and cultural governance.

There were also numerous difficulties throughout the process due to the wide diversity of concepts handled by the countries, the volume and dispersion of official information and, particularly, the different approaches of the participatory theme. The effort was focused on finding a common guideline through the same narrative structure, so that the reflections, interpellations and questions that came as a result of the analysis of each country's particular processes could fuel a broader reflection on the challenges of ICH safeguarding.

In order to facilitate this reading from a regional perspective, Luisa Fernanda Sanchez (CRESPIAL's consultant) wrote a critical and cross-referenced analysis of each country's State of the Art. This introductory document gives us a wide and complex view of the region regarding the implementation of UNESCO 2003 Convention. A process that, even though has had its specificities and particular challenges, finds many intersection points among the experiences.

In this stocktaking document we also discuss, in a detailed way, how the field of ICH is deeply affected by the political and economic changes in each country. Thus, taking the last exercise conducted by the Center in 2010 as a reference, we can assert that the topic has gained a greater role in public agendas because policies for ICH safeguarding are being merged with both

---

4 They are the governmental institutions representatives of each of CRESPIAL's member states.

specific problems in national territories and with the betting of global scenarios.

Intersectoral efforts combining ICH management with other areas such as education, health, cultural industries, tourism, and more, have increasingly grown. The growth of the field is also explained in conceptual terms considering that a greater adoption of the ICH concept has been achieved. As a result, there has been a paradigm shift which has involved a transition from a folklorizing vision of cultural expressions to a safeguarding approach.

Finally, perhaps one of the greatest contributions of this publication has been the fact of confirming that one country's lessons and answers regarding ICH challenges could give an answer to another country's questions and problems. Therefore, it opens up important possibilities for South-South cooperation and joint strategic planning.

At a time when we face the challenges of sustainable development and the adjustment of democracies against political, economic and social crisis; the ICH field becomes a privileged area to find answers and alternatives from local and community processes. In this way, different initiatives can strengthen countries by building a culture of peace, all thanks to the recognition and appreciation of diversity from a rights-based approach.

In this framework, the cooperation space of CRESPIAL and its role as facilitator of joint efforts among countries makes even more sense at a time when we need to provide local solutions to global problems. Thus, our work and commitment to promote regional integration and cooperation for ICH safeguarding, seeking to contribute to the well-being, dignity and creativity of the region's populations, is still more valid than ever.

# Una mirada panorámica a la gestión del patrimonio cultural inmaterial en América Latina

Luisa Fernanda Sánchez Silva<sup>1</sup>

## I. INTRODUCCIÓN

Hablar de patrimonio inmaterial en América Latina es remitirnos a un campo que ha venido ganando en importancia en los últimos años, tanto en las políticas públicas como en las reivindicaciones de diferentes actores y movimientos sociales. Por supuesto, las expresiones, usos, significados, saberes y sentires colectivos que hoy agrupamos bajo este concepto, han hecho parte constitutiva de la megadiversidad cultural que caracteriza a América Latina desde tiempos prehispánicos. Estos han sido objeto de medidas propias de salvaguardia que han permitido a los grupos humanos velar por su continuidad y motivar su adaptación frente a las transformaciones del mundo moderno y a los impactos de la globalización. Asimismo, estos fueron temas de estudio fundamentales para campos de experticia como el folklore y estuvieron en la base de las reivindicaciones sociales que, a través del concepto de cultura popular, permitieron a amplios sectores de población excluida e invisible disputar su lugar simbólico en los proyectos clásicos de nación mestiza, elitista y urbanocéntrica que nos caracterizaron durante buena parte de nuestra existencia como repúblicas independientes.

No obstante, como ha sido señalado desde múltiples lugares, en los últimos veinte años el concepto adquiere concreción como objeto generalizado de política pública y se le designa como instrumento estratégico a la hora de avanzar hacia horizontes comunes (el desarrollo sostenible o el fomento de

---

<sup>1</sup> Consultora y coordinadora para la elaboración de los *Estados del arte*. Profesora e investigadora del Departamento de Antropología, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

la diversidad cultural), al mismo tiempo que se convierte en un lugar privilegiado de análisis para quienes interrogan críticamente sus logros, retos y posibilidades. Hoy, a casi quince años de la firma de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, es importante volver la mirada hacia este campo que parece haber ganado un importante lugar institucional y que ha permitido a los diferentes países de América Latina trabajar en pro de sus especificidades locales, tanto como reconocer el potencial de su unidad como continente. Esta actitud adquiere aún más pertinencia en el panorama latinoamericano del presente, un panorama de gran efervescencia política, de profundas desigualdades económicas y retos medioambientales, pero en el cual los grupos, colectivos, comunidades originarias, indígenas, campesinos, garifunas, raizales, palenqueros y los cientos de habitantes rurales y urbanos que dan sentido y trascendencia a sus vidas a través de las manifestaciones de aquello que consideran constitutivo de su identidad, han asumido con voz propia su derecho a disfrutar del patrimonio tanto como han otorgado a los Estados la responsabilidad de trabajar conjuntamente para ello. ¿Cómo han asumido el desafío de la salvaguardia los Estados latinoamericanos? ¿Qué ha implicado en términos de los ajustes a su institucionalidad cultural? ¿Hemos logrado abrir la noción de patrimonio por tanto tiempo cerrada a los vestigios materiales de las gestas coloniales y de los pasados prehispánicos?

El CRESPIAL ha considerado prioritario retomar este valioso ejercicio de introspección, en aras de construir conjuntamente una herramienta que sea útil para futuras políticas, ejercicios de proyección o de investigación. Por ello, se convocó a los Núcleos Focales de los 15 países miembros a actualizar sus *Estados del arte* en materia de gestión del patrimonio cultural inmaterial, invitando a los consultores seleccionados para ello, a indagar en las iniciativas públicas (y en algunos casos privadas), los instrumentos, las políticas, planes y proyectos que han dado vida a los objetivos de la Convención.

Para todos aquellos actores e instituciones interesados en el campo del PCI y sus desarrollos, los *Estados del arte* del CRESPIAL son uno de los productos de mayor uso y difusión en nuestro continente. Estos tienen la ventaja de ser herramientas flexibles en su formato que van más allá de los informes de evaluación solicitados periódicamente por la UNESCO u otros organismos

nacionales y multinacionales. Aun cuando se dirigen a un público amplio y no necesariamente especializado, permiten un análisis un poco más profundo de la gestión del PCI, identificando las diferentes estrategias llevadas a cabo por los gobiernos e instituciones encargadas, así como por las comunidades, grupos portadores, actores y movimientos sociales. Al igual que en las diferentes oportunidades en que este ejercicio ha sido realizado, los estados del arte que se presentan a continuación, más allá de recoger los últimos adelantos en la implementación de la Convención de 2003 y de las diferentes políticas culturales que le han dado alcance, buscan brindar una lectura crítica y propositiva, abierta a analizar las posibilidades que dicho campo ha abierto. Sin embargo, también están prestos a reconocer las limitaciones y oportunidades de mejora en los diferentes niveles en los que el PCI tiene incidencia.

Ahora bien, con el fin de sacar el máximo provecho de esta iniciativa, los trabajos presentados partieron de lo que había sido ya reportado en los ejercicios anteriores, incorporando, a través de recursos de síntesis como las líneas de tiempo, un somero balance de la gestión del PCI en cada uno de los países. Otra particularidad de los trabajos de 2017 se refiere al lugar analítico que se le dio a la dimensión participativa de los procesos. Para todos aquellos que han trabajado en este campo, uno de los aprendizajes más importantes que ha permitido el concepto de patrimonio cultural inmaterial es el énfasis en las comunidades, grupos e individuos que llevan en sus memorias y encarnan en sus prácticas aquellos saberes que, al hacerse conscientemente movilizados, adquieren su carácter patrimonial. No obstante, la participación ha dejado progresivamente de entenderse como un requisito en los procedimientos técnicos que llevan a la realización de inventarios, expedientes, fichas de registro o proyectos de documentación e investigación y que, por lo general, se limitaba al “consentimiento libre e informado” o a una fase de socialización en los proyectos. La participación es hoy en día un ámbito de reivindicación como derecho cultural, tanto como es una condición *sine qua non* para lograr una verdadera apropiación y un fortalecimiento de las capacidades que buscan ampliar la gobernanza cultural del conjunto de la sociedad civil. Por esta razón, sigue siendo un importante desafío trabajar en esta noción y generar un análisis reflexivo que permita entender cómo se ha

aplicado este ideal en cada país y hacia qué dirección pueden orientarse las políticas e iniciativas concretas de salvaguardia.

Antes de adentrarnos en la especificidad de cada país, se presenta a continuación un balance general, con el objetivo de caracterizar el campo institucional del PCI latinoamericano, identificar los avances y retos comunes que, como continente, enfrentamos en la actualidad, así como señalar algunos debates que continúan vigentes o que se perfilan a la luz de los avances recientes. Para ello se tomó una serie de variables de contexto que nos permiten, no tanto observar un solo modelo de cumplimiento de los compromisos de la Convención 2003, sino tratar de ampliar nuestro marco de comprensión a los escenarios específicos en los que cada Estado y cada Gobierno ha hecho apuestas particulares y ha desplegado sus esfuerzos institucionales. Dichas variables de análisis propuestas por el CRESPIAL son:

- Gestión de expresiones culturales previa a la Convención 2003
- Institucionalidad y medidas para la participación de los portadores y comunidades
- Procesos políticos nacionales
- Cooperación sur-sur
- Recursos disponibles
- Intersectorialidad

Este balance se nutre de la información brindada por los documentos de estado del arte elaborados durante el segundo semestre de 2017 y del esfuerzo de los consultores y consultoras por dar coherencia a una historia larga y no exenta de tensiones. Para no complejizar la lectura no citaremos textualmente cada documento, sino que nos limitaremos aquí a reconocerlos como fuente primaria del análisis que presentamos a continuación, especificando los países a los que se refieren las afirmaciones.

## II. LA SALVAGUARDIA EN RETROSPECTIVA

Antes de la ratificación de la Convención de 2003 y de la institucionalización del campo del PCI, todos los países de América Latina dieron a la promoción de la cultura (en su versión “cultura”, “popular”, nacionalista, centrada en las artes clásicas o en una concepción más holística) el carácter de responsabilidad de los Estados. Sin embargo, dicha responsabilidad se materializó de forma divergente. Algunos países como México, Brasil, Venezuela y Perú, hicieron de la investigación, la promoción y el reconocimiento de las expresiones culturales (prehispánicas, originarias, amerindias, mestizas o populares) el centro de importantes esfuerzos estatales que tomaron la forma de políticas tempranas, generalmente acompañadas por un desarrollo significativo de la antropología, como una aliada científica determinante y del folklore como campo de experticia formal. Resulta interesante, dentro de este panorama, el caso boliviano, en donde la política cultural se centró enfáticamente en las expresiones festivas, musicales, dancísticas y orales de los pueblos indígenas y campesinos, en algunos momentos para reforzar un proyecto nacionalista, en otros para apoyar la transición hacia un modelo multiculturalista. Esto se tradujo en una preocupación temprana por buscar mecanismos internacionales de protección que influyen directamente en las arenas globales de la UNESCO al poner en el debate, desde los años 70, el reto de desarrollar sistemas de reconocimiento, registro o protección de las obras maestras y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades locales. No obstante, estos avances deben ser leídos en clave crítica, pues, en muchos casos, los modelos nacionalistas fomentaron visiones folklorizantes en las que el PCI fue concebido como recurso de la nación que debía ser protegido frente a apropiaciones indebidas, pero sin una visión que propendiera por su promoción y fomento.

En otros países como Colombia y Ecuador, históricamente orientados a la protección y exaltación de los vestigios excepcionales del patrimonio cultural material, esta tendencia a reconocer que el PCI debe ser un asunto capital

en la agenda pública de los Estados y Gobiernos se remite al “giro multicultural” de los años 90. En esos años se retoma la preocupación global por la diversidad cultural y las adecuaciones en las Cartas Políticas permiten, simultáneamente, la consolidación de la institucionalidad cultural mediante la creación de Sistemas Nacionales de Cultura y la elevación de Institutos y Secretarías al rango de Ministerios. En dichos países, la institucionalización del PCI se acompañó de una mayor circulación de bienes intangibles a partir de la industria cultural y el turismo, enfoque que ha generado retos importantes que aún están vigentes y que se han venido profundizado.

Desde esta perspectiva diacrónica, en muchos países se resalta el papel de instituciones sectoriales o específicamente destinadas a la protección del patrimonio cultural. Se evidencia el papel que cumplieron los museos, las bibliotecas, pero sobre todo los institutos, mostrando que la cultura ha hecho parte importante de la arquitectura institucional latinoamericana, con ritmos y modalidades propias de acuerdo con los contextos nacionales. Históricamente, algunos institutos fueron fundamentales en la formulación temprana de políticas culturales y de acciones destinadas a la protección de las expresiones culturales tradicionales. Este es el caso de Bolivia, en donde el Instituto Boliviano de Cultura se propuso la generación de políticas integradoras tendientes a armonizar los altos valores de las culturas nativas, de las herencias del mestizaje y de la cultura universal. También es el de Venezuela con el Instituto Nacional de Folklore (INAF), Guatemala con el Instituto de Antropología e Historia (IDAEH), Ecuador con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultura (INPC) y Brasil con el reconocido Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Asimismo, resulta ser una variable importante para comprender las actuales aplicaciones de la Convención, la experiencia previa de los países en proyectos e iniciativas que requirieron articulaciones importantes con otras instituciones, esfuerzos de gobierno, creación de redes internacionales o acuerdos con organismos internacionales. Observamos este valioso antecedente en Perú, a través del programa del Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan del que hacen parte Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador, que se inició algunos años antes de la Convención de 2003. También en Guatemala con la creación



del Subcentro Regional de Artesanías y Artes Populares, resultado de la firma de un tratado internacional con la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los documentos presentados permiten, igualmente, analizar la relación de los países con la UNESCO. Como se mencionó, en casos como el de Bolivia, esta relación ha sido activa y tuvo desde el principio, en lo que entonces se denominaba bajo los conceptos de folklore o cultura popular, un núcleo central de discusión. Lo mismo ocurre con Perú, una de cuyas especialistas participó en el diseño final de la Convención de 2003, y en Venezuela, en donde las directrices en materia de política cultural se orientaron muy pronto a seguir sus recomendaciones. En una buena parte de los países, la relación con este organismo internacional se potencializó con la ratificación de la Convención de Patrimonio Mundial. Asimismo, países que contaban con inscripciones en la Lista de Obras Maestras del Patrimonio Oral e Intangible (Ecuador, Colombia, Bolivia, Guatemala, Honduras, Cuba) adquirieron una experiencia notable en la gestión de dichas manifestaciones y en la aplicación de herramientas del patrimonio como los inventarios.

### III. LA GESTIÓN DEL PCI EN AMÉRICA LATINA ENTRADO EL SIGLO XXI

En el último ejercicio de actualización de los *Estados del arte* que publicó el CRESPIAL en 2010, el continente atravesaba por un momento histórico que dejaba entrever algunas de las disímiles formas que había tomado la implementación de la Convención de 2003 en términos de los instrumentos normativos que habían sido adoptados, de la adecuación de la institucionalidad a las disposiciones del tratado internacional y, en general, del énfasis que cada país había dado hasta entonces a los mecanismos de salvaguardia. Aunque podríamos argumentar que siete años son poco tiempo para ver cambios significativos, lo cierto es que el panorama actual en América Latina pareciera tomar virajes inesperados que invitan a tomar en consideración el contexto más amplio en el que los gobiernos están hoy implementando la Convención de 2003.

En primer lugar, América Latina vivió una importante transformación en la primera década del siglo XXI, que llevó a un replanteamiento drástico de los modelos de gobierno hasta ahora vigentes. El llamado “progresismo” o “giro a la izquierda” significó que en varios países se hiciera una apuesta por el retorno del Estado como eje de regulación de los mercados y de la redistribución de la riqueza social. Esto se acompañó de intentos de revalorización de los circuitos productivos locales y de las fuentes de exportación nacional de recursos naturales; de un compromiso mayor del Estado en el respeto de derechos sociales a través de transferencias de recursos condicionados a las rentas y de un importante desarrollo de mecanismos de cooperación sur-sur (Unasur, Celac, Alba) que valorizaron la construcción de un espacio regional latinoamericano, entre otros factores (Svampa, 2017; Le Quang y Ramírez, 2016). “Buen Vivir”, “Mejor Vivir” y “descolonización” fueron conceptos que atravesaron los debates intelectuales y políticos, así como las luchas sociales de la época, y plantearon modos diversos –si no antagónicos– de pensar la relación entre economía, sociedad, naturaleza y política (Svampa, 2017: 51). Los *Estados del arte* reflejan las repercusiones directas sobre la gestión del PCI que tuvieron estas transformaciones políticas, lo que se tradujo, en algunos países, en un compromiso explícito con el fortalecimiento de la interculturalidad y la autonomía (Bolivia), en una actualización y afianzamiento territorial del concepto de cultura popular (Venezuela), en una profundización del reconocimiento a los diferentes naciones (Ecuador) y, en otros países, como Brasil, en la democratización de las políticas culturales con miras al fortalecimiento, en todos los niveles territoriales, de la gobernanza cultural y la participación. En estas aperturas, el campo del PCI encontró posibilidades inéditas y se posicionó como un mecanismo estratégico de reivindicación social. No obstante, en los últimos cinco años, varios países de América Latina enfrentan una crisis política que reta la continuidad de estos procesos y los sitúa, en la actualidad, en un momento de transición, puesto que ha implicado modificaciones importantes en la institucionalidad y en los recursos destinados para tales fines.

En segundo lugar, los últimos años han estado marcados por una serie de crisis económicas que se han venido profundizando. Si bien la década de los 90 fue testigo del “boom de los commodities” en el que varias economías

se favorecieron de los altos precios de los productos primarios y los Gobiernos adoptaron una visión productivista del desarrollo, la primera década del nuevo milenio llegó, en algunos países, con un cuestionamiento directo de los modelos económicos. Ahora bien, más allá de las opciones ideológicas de cada Gobierno, en el continente se presentó una contracción del crecimiento del producto interno bruto que se evidenció de manera heterogénea. En 2016, de acuerdo con el informe periódico presentado por la CEPAL, se observaban dos panoramas:

Las economías del norte de la región recibieron el impulso derivado de un precio reducido de la energía, la recuperación de su demanda externa y los ingresos por remesas, así como de una dinámica inflacionaria que permite la existencia de cierto espacio para las políticas de estímulo a la demanda agregada interna. Las economías del sur de la región enfrentan un importante deterioro de los términos de intercambio, una menor demanda agregada externa (de China y los socios intrarregionales) y una considerable reducción del espacio para adoptar políticas de estímulo a la demanda (2016: 16).

El sector cultural se ha visto particularmente afectado por esta situación, articulada a las crisis económicas y financieras globales y a una retórica que reconoce cada vez más el papel dinamizador de la cultura, al mismo tiempo que recorta y limita los mecanismos, finanzas y espacios para su gestión efectiva. A pesar de los esfuerzos institucionales por mantener activas las acciones relacionadas con la salvaguardia del PCI, en Venezuela, por ejemplo, los presupuestos públicos destinados a las carteras de cultura cayeron de forma abrupta, con recortes que significaron una transición del 27% del PIB a menos del 0,05%. Asimismo, se presenta una disminución drástica de recursos humanos que hace que, en algunos países, las instituciones responsables cuenten con pocas personas para hacerle frente a los compromisos de la Convención de 2003.

Estos factores que, en conjunto, complejizan el escenario latinoamericano, coexisten paradójicamente, con aperturas significativas. Es el caso de México y Argentina en donde, a pesar de las diferentes crisis sociales y políticas, la

legislación cultural ha visto avances sumamente importantes a través de la adopción de una Ley Orgánica de Cultura y Derechos Culturales del ámbito nacional en el caso mexicano y, en Argentina, en el nivel provincial. En dichos instrumentos el PCI es objeto de un tratamiento especializado, se aleja de visiones preservacionistas para comprometerse ampliamente con el reconocimiento de derechos culturales y, no menos importante, posibilita campos de articulación con otros instrumentos orientados al desarrollo sostenible o la profundización de la democracia.

Desde otro ángulo, el fortalecimiento de un escenario latinoamericano de gestión cultural también ha posibilitado un aumento de la cooperación sur-sur y, al mismo tiempo, la consolidación progresiva de experticias nacionales en la salvaguardia del PCI. Un caso paradigmático es Guatemala que demuestra avances en la gestión de apoyo técnico de varios países, apelando a su experiencia en formulación de planes de salvaguardia (Colombia), mecanismos de participación (Brasil) y confección de inventarios. Otro escenario interesante lo proporcionan las declaratorias del Mercosur en las que los países del Cono Sur han consolidado experiencias importantes como la que condujo a la declaratoria de la Payada en 2015 por iniciativa de Argentina, Uruguay y, posteriormente, de Chile que se incorporó en 2016.

Otra apertura tiene que ver con las transiciones democráticas hacia procesos de paz y reconciliación. Desde los años 80, países como El Salvador, aunaron esfuerzos por pensar la relación entre conflicto, memoria y patrimonio. Recientemente, en el caso colombiano, el PCI y su gestión se esbozan como oportunidades históricas para redefinir los modelos de nación y reparar los tejidos sociales rotos por décadas de conflicto.

Por último, en materia de instrumentos internacionales, varios países ratificaron desde entonces la Convención de 2005 sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, creando una institucionalidad paralela o complementaria a aquella que se encarga de la gestión de las acciones de salvaguardia. Por ejemplo, en Guatemala, la ratificación de ambas Convenciones se hace en el mismo año (2006), por lo que se crea la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Cultu-

ras, encargada de programas como la construcción de políticas culturales municipales, la construcción de la cuenta satélite de cultura y el apoyo a la creación de emprendimientos culturales, acciones que en muchos casos se relacionan directamente con las expresiones del PCI.

## IV. LA SALVAGUARDIA INSTITUCIONAL: AVANCES, PERMANENCIAS Y TRANSICIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE 2003

### MARCOS NORMATIVOS E INSTRUMENTOS REGULATORIOS

Ramón Pajuelo, en 2010, identifica tres grandes tendencias en materia de políticas de patrimonio cultural inmaterial:

1. La situación de un país, Brasil, con una experiencia previa y sólida de salvaguardia que dio lugar a una institucionalidad temprana, a mecanismos de registro y a una articulación entre diferentes políticas culturales. Esto facilitó la transición hacia la adopción de los marcos de la Convención de 2003 y resultó en un corpus sólido de mecanismos regulatorios y normativos.
2. Los países que diseñaron o incorporaron a sus legislaciones culturales instrumentos de política como resultado de cambios estructurales significativos –la adopción del multiculturalismo o los acuerdos de paz, fundamentalmente– o la suscripción de la Convención y de sus disposiciones (Ecuador, Colombia y Bolivia).
3. Los países que habían hecho hasta entonces importantes esfuerzos en materia de programas e iniciativas, pero que no contaban con una política como tal o con instituciones delimitadas para la salvaguardia del PCI (Perú, Chile, Uruguay y Paraguay).

En la actualidad, este panorama se ha mantenido a grandes rasgos, aunque con algunos cambios, puesto que hoy, muchos más países han fortalecido sus marcos legales y regulatorios en diferentes niveles y en función de transformaciones estructurales en sus modelos de gobierno o bien, del fortalecimiento de su institucionalidad cultural.

En general, se observa un avance continuo en la incorporación del patrimonio cultural inmaterial en las normativas jurídicas que indican el tránsito definitivo del paradigma del folklore –centrado en la preservación y rescate cultural– hacia el del PCI. En términos de las herramientas de política cultural, esto se traduce en una preeminencia de la formulación de leyes y no aún de políticas, estas últimas, importantes, en la medida en que permiten una orientación más detallada y flexible. Solo en Colombia, Guatemala y Ecuador se cuenta con políticas o lineamientos aprobados por actos administrativos, aunque en Guatemala, a pesar de estar dotada del andamiaje técnico, la política no se encuentra activa en este momento. Ahora bien, como lo señala el estado del arte de Argentina, las leyes que se decantan de las Cartas Políticas son objeto de actualización periódica y se complementan con un corpus de leyes federales, provinciales o departamentales que, aunque heterogéneas en sus propósitos y objetivos, contribuyen indirectamente a generar un contexto normativo favorable para la gestión del patrimonio cultural inmaterial. Por supuesto, más allá de la forma precisa que tome la política cultural (leyes, actos administrativos o documentos de política) lo trascendente es el horizonte de posibilidades que esto permita, horizonte que depende fundamentalmente de la apropiación social y la pertinencia para la sociedad civil de estos instrumentos.

Así, en casi todos los países hay desarrollos legislativos sectoriales que han resultado en leyes orgánicas o generales de cultura. Algunas asumen explícitamente el PCI, como en el caso de Colombia y Ecuador. En este último, la ley establece un régimen especial del patrimonio cultural inmaterial que reconoce el dinamismo y la autonomía de este tipo de patrimonio, previene contra los riesgos de su institucionalización y veta la arrogación de su titularidad a nombre de particulares. Ahora bien, en otros países, donde la creación del sector cultural es más reciente o el énfasis histórico ha estado puesto en

la protección del patrimonio material, las leyes aún remiten a un concepto general de patrimonio cultural o utilizan categorías como las de “bien cultural” (El Salvador) o “cultura popular” (Cuba). Un caso interesante es Uruguay que atraviesa en este momento una reforma legislativa. Allí, el grupo de especialistas que orienta la redacción de una nueva Ley de Patrimonio, en proceso desde 2016, optó por el concepto más genérico de patrimonio cultural tras una juiciosa reflexión. Orientados por la Declaración de Yamato de 2004, el proyecto de ley señala la dimensión inmaterial como constitutiva y preeminente de toda expresión y enfatizó en el vínculo con lo colectivo y la construcción de identidad. Por supuesto, la aplicación de las leyes varía en función de la estructura de gobierno de cada país, bien sea que se rijan por leyes generales de la república o por leyes de los estados y provincias. La siguiente tipología legislativa podría aplicarse para comprender el panorama general:

- a. Países que poseen una normativa específica para PCI a nivel local o nacional como Argentina (en el nivel local), Brasil, Colombia, Ecuador y Guatemala.
- b. Países con una normativa general con mención directa al PCI como México y Bolivia.
- c. Países cuya normativa hace una mención indirecta al PCI, bien sea en las Constituciones Políticas o en instrumentos que generalmente utilizan el concepto más amplio de patrimonio cultural como Costa Rica, Cuba, Paraguay y Venezuela.

Una lectura transversal de los *Estados del arte*, a la luz de esta tipología, muestra el aumento de los instrumentos que mencionan directa o indirectamente el PCI. No obstante, estos desarrollos normativos son recientes, por lo que no todos cuentan con sistemas de reglamentación que los hagan operativos en la práctica.

Por otro lado, en una buena parte del subcontinente, las leyes de protección a los pueblos originarios e indígenas o los documentos conceptuales que les dan sustento complementan el universo legislativo del PCI y le dan apertura. En El Salvador, por ejemplo, se señala la publicación del *Perfil de los pueblos indígenas en El Salvador*, de 2003, como la base de acciones posteriores de política pública en el ámbito del PCI, así como las ordenanzas

municipales que hacen un reconocimiento formal de los grupos indígenas y de sus cosmovisiones. Sin duda, Bolivia presenta avances sustanciales a este respecto, al promover la conformación de gobiernos municipales indígenas y campesinos a través de la figura de "Autonomías Indígenas Campesinas Originarias" (AIOC). Allí, por ejemplo, el Gobierno Autónomo Guaraní Charagua Iyambae formula, ejecuta e implementa planes, programas y proyectos de protección, conservación, recuperación, custodia y promoción de la cultura guaraní en su territorio. Colombia también ha hecho avances importantes. En este país, la Corte Constitucional se ha pronunciado a través de más de 150 sentencias en situaciones conflictivas de consulta previa y vulneración de derechos culturales a grupos étnicos. Estas sentencias inspiraron la formulación de la Política de Salvaguardia y han comprometido al Gobierno colombiano a iniciar procesos participativos que han resultado, por ejemplo, en la reciente declaratoria del sistema de conocimientos tradicionales de los cuatro pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, tras un proceso de casi una década de articulación institucional, diálogos con los cuatro pueblos y fortalecimiento de sus autoridades tradicionales para la toma de decisiones en el campo patrimonial. En esta misma dirección ha avanzado México, frente al riesgo de desaparición de sus lenguas indígenas.

## DESARROLLO INSTITUCIONAL

Para el período transcurrido entre 2010 y el presente, se observan avances importantes en la consolidación de una institucionalidad nacional, en la definición de normativas de regulación interna, así como una tendencia a concentrar las funciones de protección, promoción y diseño de políticas en Ministerios. En términos generales, se observan cuatro modelos institucionales que responden a las particularidades de cada país y al desarrollo desigual del sector cultural:

- Un modelo definido por una institución central (Ministerio o Secretaría), un espacio intersectorial que coordina las acciones (Mesa, Comisión o Consejo) y una institución (instituto) que asume algunas funciones precisas. Este es el caso de Argentina, Brasil y Ecuador que cuentan, además, con un sistema nacional de cultura en los diferentes niveles político-adminis-



trativos que determina la arquitectura institucional y permite la acción descentralizada. Colombia también podría situarse entre los países que funcionan bajo este modelo, aunque el sistema nacional de cultura es aún muy débil en varias regiones del país.

- Un modelo caracterizado por una institución central que incluye, en algunos casos, un espacio intersectorial y una red dispersa de instituciones culturales que cumplen funciones importantes de salvaguardia, aunque no necesariamente alineadas con la Convención. Un ejemplo de este modelo lo vemos en Costa Rica con su Comisión Nacional para el PCI.
- Un modelo donde existe una institución rectora (Ministerio) y dos dependencias o instituciones que, en la práctica, se encargan de la gestión y cumplen funciones importantes de salvaguardia. Este es el caso de Venezuela con el Instituto del Patrimonio Cultural y el Centro de la Diversidad Cultural. También lo es el de Guatemala con la Dirección Técnica de Patrimonio Intangible y la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas. Podríamos también clasificar en este modelo a Cuba con el Consejo Nacional de Casas de Cultura y el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Un caso interesante es México, en donde una dependencia se encarga de lo relacionado con el patrimonio mundial y otra de la salvaguardia a nivel de los estados. En este país, cuyos espacios intersectoriales han sido transitorios, tiene un sólido sistema federal de cultura que ha permitido el desarrollo de una gran diversidad de acciones de salvaguardia descentralizadas.
- Un modelo más sencillo y centralizado, en el que hay una institución principal (Secretaría o Ministerio) que dispone de una Dirección o Sección de Patrimonio Cultural desde la cual se da aplicación a la Convención de 2003, aunque encuentra apoyo en las redes de instituciones de cultura que dependen de los gobiernos locales. Este es el caso de Bolivia, El Salvador, Perú y Paraguay.

Así, en algunos países, los institutos que ejercían históricamente las acciones de salvaguardia, pasan a ser subordinados a los Ministerios de Cultura, lo que en algunos casos garantiza la continuidad y da alcance a las líneas

de acción (Venezuela), pero, en otros, significa la reducción del enfoque de sus acciones a una sola línea: la promoción y ejecución de investigaciones (Ecuador). En cuanto a la función más reciente de los Institutos en el resto de América Latina, se hace claro que, en lo referente al PCI como objeto de política, hemos pasado de un marco de acción que privilegiaba la protección (entendida sobre todo como las acciones orientadas a la investigación, documentación y registro) a otro que hace énfasis en la gestión y amplía el espectro a un conjunto integral de acciones de puesta en valor, en diferentes niveles de la esfera pública.

Lo anterior no demerita que la salvaguardia siga ejecutándose, en la práctica, a través de una gran variedad de instituciones desconcentradas del sector cultural que, a través de museos, centros culturales o de investigación, promueven y llevan a cabo procesos importantes que incluso superan la escala nacional, para convertirse en referentes regionales. Esto se evidencia con especial atención en Costa Rica, Cuba y México y, por supuesto, Brasil. Además de las instituciones, en los niveles locales, se señala la importancia de mecanismos descentralizados de apropiación como la Red de Casas de la Diversidad Cultural (Venezuela), el Programa de Vigías del Patrimonio (Colombia) o la Red de Museos Provinciales y Municipales de Cuba.

Un aspecto que merece resaltarse es que en varios países se evidencia la importancia de definir espacios de trabajo y concertación interinstitucionales. En algunos países, este ejercicio ha sido permanente y, en otros, coyuntural. No obstante, las comisiones, mesas y grupos de trabajo han realizado acciones importantes de seguimiento, monitoreo y asesoría a las acciones y proyectos de salvaguardia (Costa Rica con la CONAPACI, por ejemplo); o han brindado escenarios críticos de discusión sobre criterios y procedimientos (Ecuador con la Mesa de Trabajo entre Ministerios e INPC y México con el Grupo de Trabajo sobre PCI). Lo importante en estos escenarios es que se han podido incluir diferentes voces, así como garantizar la presencia de la academia y de expertos en el campo. Ahora bien, dentro de estos espacios, también se presentan conflictos en la definición de responsabilidades. Se señala en algunos países que las acciones de las comisiones sobrepasan sus competencias (Costa Rica), mientras que, en otros, lo que se debate es

su composición, pues no siempre los expertos que las integran demuestran suficiente sensibilidad hacia el tema del PCI (Uruguay).

De la misma forma, los espacios de integración política están cumpliendo un rol que vale la pena desarrollar. Este es el caso del Mercosur cultural, instancia cuya función es la de promover y dar a conocer los valores y tradiciones culturales de los Estados Partes, mediante propuestas de cooperación y coordinación en el campo de la cultura. Experiencias conjuntas como la declaratoria del Tango o el itinerario de las Misiones Jesuíticas que involucra a Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay han permitido el desarrollo de iniciativas que requieren de coordinación internacional e interdepartamental o interprovincial. En este tipo de espacios encuentran potencialidades inéditas conceptos como el de 'patrimonio fronterizo', también desarrollado en Uruguay mediante un ejercicio de registro de 29 manifestaciones en el departamento de Cerro Largo que se centró, fundamentalmente, en los oficios tradicionales.

La relación con las oficinas o instituciones que actúan en representación de la UNESCO, también puede ser objeto de un análisis comparativo. No obstante, debe precisarse que, dado que esta institución opera en los sectores de educación, ciencia y cultura, no funciona de la misma forma en todos los países. En casos como el de Costa Rica, sede de la Oficina Regional Unesco para Centroamérica, se resaltan los esfuerzos orientados a coordinar con las instituciones estatales la realización de inventarios, investigaciones o capacitaciones. En Venezuela, la Oficina Técnica de Enlace con UNESCO (OTEU) ha guiado la implementación y ha hecho el monitoreo de los planes de salvaguardia. En Argentina, la Comisión Nacional Argentina para la UNESCO (CONAPLU), que depende del Ministerio de Educación y no del Ministerio de Cultura, ha adelantado acciones de coordinación como la definición de un calendario conjunto de trabajo con la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales del Ministerio de Cultura para la elaboración de los expedientes. En cambio, en países como México, aun cuando se reconoce la labor fundamental de la Dirección de Patrimonio Mundial en la implementación del conjunto de disposiciones y acuerdos de la UNESCO, esta relación no siempre ha sido armoniosa, en cuanto se presentan divergencias frente a la autonomía de

dichas oficinas o instituciones y frente a los criterios técnicos para proceder a las inclusiones en Listas.

## **MECANISMOS DE SALVAGUARDIA FRECUENTEMENTE UTILIZADOS**

En los últimos años, la mayoría de países han acogido las directrices de la UNESCO y han aceptado el reto de incorporar una visión integral de la salvaguardia mucho más orientada al fortalecimiento de las capacidades y a garantizar la participación de las comunidades portadoras, que al reconocimiento institucional de manifestaciones aisladas. No obstante, esto se ha hecho de forma progresiva.

Las declaratorias siguen siendo el mecanismo que más apropiación tiene en la sociedad civil dado que en la mayoría de los casos ha sido el más promovido por los Estados; pero, a su vez, es aquel que presenta mayores dificultades en términos de gestión. Esta apropiación de las declaratorias empieza a hacerse visible en los niveles locales, de manera que países como México, que habían concentrado sus esfuerzos en las siete manifestaciones incluidas en la Lista de la Humanidad, hoy tiene 56 declaratorias en el nivel de estados. Por su parte, Colombia ha visto también un desarrollo de Listas representativas en el ámbito departamental, con 37 declaratorias en un solo departamento (Santander), contra 21 en la Lista representativa de PCI nacional. Bolivia es el país en donde esto es más notorio, con 139 declaratorias, 39 de ellas localizadas en La Paz. Estos desarrollos deben analizarse con detenimiento, pues no en todos los casos responden al espíritu de la Convención de 2003 o a los criterios establecidos por las políticas del nivel nacional. De hecho, frente a las declaratorias, los *Estados del arte*, desde 2005, han señalado continuamente su instrumentalización política, así como las dificultades ligadas a la falta de rigor técnico, situaciones que se ven potenciadas por la multiplicidad de instituciones que tienen esta competencia y por la imposibilidad de encontrar medios de coordinación entre ellas.

Como mecanismo de salvaguardia le siguen en apropiación los inventarios y/o sistemas de registro, tema al que los países han invertido recursos

significativos. Además de Brasil, que constituye un caso emblemático, en muchos casos se hicieron inventarios para las manifestaciones que entraron a formar parte del programa Obras Maestras y luego en las Listas de la Humanidad, lo que fortaleció la experiencia de los países en la investigación de las manifestaciones. Asimismo, países como Brasil, Cuba, México, Perú y Venezuela cuentan con importantes acervos documentales que complementan los sistemas digitales a los que las personas pueden aportar. Otro avance lo constituyen las metodologías, que han venido definiéndose y mejorándose en función de la experiencia adquirida. Este ha sido el caso del El Salvador y Colombia, este último, ejemplo de una apuesta importante por hacer de los inventarios procesos de investigación propia con un énfasis en el potencial comunicativo que tienen los resultados de esta mirada profunda al universo cultural de cada una de las expresiones.

Desde una perspectiva más amplia, encontramos acciones de salvaguardia orientadas a la sensibilización, documentación, creación de espacios de diálogo, reconocimiento, promoción y difusión.

## **FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LOS NIVELES LOCALES, PROVINCIALES Y NACIONALES**

Tras una década de gestión del patrimonio cultural inmaterial y un primer momento dedicado a la apropiación de los conceptos y herramientas de la Convención de 2003, varios de los países hoy demuestran una mayor conciencia de la necesidad de fortalecimiento de capacidades. En algunos países, el énfasis se ha puesto en el fortalecimiento del ámbito nacional para la salvaguardia y se ha acudido para ello a otras instituciones nacionales o a los organismos de cooperación internacional. Costa Rica, por ejemplo, se benefició del Proceso de Fortalecimiento Institucional, a cargo del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) que permitió formular un modelo de gestión institucional del PCI con miras a establecer estándares de gestión, fortalecer la plataforma de información y trabajar sobre los criterios para las declaratorias. Este tipo de fortalecimiento institucional ha potenciado su alcance mediante la consolidación de la cooperación sur-sur, lo que se

ha traducido en talleres, ciclos de formación e intercambios de especialistas, tramitados directamente por la UNESCO o a través de las instituciones nacionales. El CRESPIAL ha cumplido un rol determinante en este sentido, constituyéndose en una plataforma de comunicación de experiencias e intercambio de conocimientos sobre PCI fronterizo y/o compartido.

Otros han hecho importantes esfuerzos en darle concreción al objetivo de garantizar una mayor autonomía y fortalecer las posibilidades reales de gobernanza cultural. Colombia es uno de ellos. Allí se creó desde 2011 la Estrategia de Capacidades de Gestión del patrimonio cultural inmaterial, como una forma de darle alcance a la estrategia global de la UNESCO y a la política nacional. Dicha estrategia está dirigida a portadores, gestores culturales, funcionarios del sistema nacional de cultura y población en general. En la actualidad cuenta con herramientas virtuales (un diplomado, un curso) y presenciales (ciclo de 4 talleres), así como con una serie de materiales (una caja de herramientas, una serie de ejercicios de sistematización sobre opciones de salvaguardia y un manual de metodologías participativas) que permiten a los participantes apropiarse, de forma didáctica, de los conceptos internacionales, tanto como aplicar sus conocimientos a través de procesos de investigación propia que hoy cuentan con una nutrida colección de publicaciones denominadas como *PCI local*.

Por su parte, algunos países han enfocado el fortalecimiento hacia la formación profesional, especialmente a través de la modalidad de cursos y posgrados virtuales. En Argentina, por ejemplo, ha aumentado la oferta de espacios de enseñanza profesional en la gestión del patrimonio. De esto dan cuenta las formaciones en gestión del patrimonio de la Universidad Nacional de la Plata o la Diplomatura en Patrimonio Cultural Latinoamericano que ofrece la Universidad Blas Pascal de Córdoba.

## **PARTICIPACIÓN COMUNITARIA**

La participación es uno de los fundamentos de la Convención de 2003 y, a su vez, uno de los mayores retos del campo del patrimonio, por tanto, tiempo relegado al dominio de la experticia y de la intervención externa. Rodrigo

Chocano, consultor de Perú, propuso una distinción (basado en el trabajo realizado por Miguel Hernández) que puede ser útil para el resto de países del continente y que se refiere a tres diferentes maneras en que dicho mandato se ha traducido.

La primera se refiere a los instrumentos y procesos que se ofertan como servicios del Estado y en los cuales los individuos, colectivos, grupos y comunidades solicitan el apoyo de las instituciones públicas y los organismos internacionales. Los mecanismos más importantes a este respecto son el sistema de declaratorias y los inventarios que tienen una importante demanda social y proveen un valorado reconocimiento simbólico para los grupos. De acuerdo con los *Estados del arte*, y como ya habíamos mencionado, este sistema, que es el más utilizado por la totalidad de los países, aunque presenta dificultades, también muestra ciertos avances que se evidencian en la definición de criterios técnicos para la salvaguardia pre y postdeclaratoria, espacios consultivos y en la mejora de los procedimientos de consentimiento libre e informado.

El segundo tipo de participación es el que se realiza mediante proyectos colaborativos entre los grupos de portadores y las instituciones. Cumplen un papel determinante para ello los sistemas de financiación mediante convocatoria, así como los canales de comunicación que permiten a las instituciones centrales actuar por demanda. A partir de los diferentes ejercicios críticos realizados por los países, este tipo de procesos empiezan a ser más comunes, como se evidencia en México, Chile, Argentina y Costa Rica.

El tercer tipo se da a través de proyectos e iniciativas de salvaguardia liderados por las propias comunidades. Este es el tipo de procesos que requiere de mayor impulso. No obstante, varios países identifican ya como “buenas prácticas” una gran variedad de iniciativas y señalan la importancia de considerar la experticia de los grupos sociales como válida y significativa, lo que demuestra una mayor apropiación de los conceptos y herramientas de la Convención. Brasil es sin duda el país que más avances presenta en este modelo de participación a partir del desarrollo de su política de Cultura Viva.

Colombia también ha hecho avances significativos al respecto, al enfocarse en el fortalecimiento de las capacidades de gestión de los actores locales.

## **RECURSOS DESTINADOS A LA SALVAGUARDIA DEL PCI**

En el tema del financiamiento es difícil hacer generalizaciones, puesto que los presupuestos nacionales son muy diferentes en cada caso. Asimismo, en los países confederados, el presupuesto se distribuye y opera a través del accionar de organismos que poseen competencias diferenciadas, despliegan labores en sus distintos niveles y acceden a distintos financiamientos. Este es el caso de Argentina, en donde el 87% de las provincias cuentan con financiamiento propio y, de este sector, el 38,5% ha recibido, además, aportes financieros del Gobierno nacional o federal.

No obstante, como se mencionó en la primera parte, los últimos tiempos se han caracterizado por un difícil panorama económico para el sector cultural, lo que no ha impedido desarrollos o esfuerzos significativos por mantener vigentes las acciones de las instituciones responsables de la salvaguardia del PCI. En esta medida, algunos países han tenido una inversión de recursos constante, sobre todo cuando se cuenta con programas que tienen amplio reconocimiento y que logran sobrepasar los avatares electorales que caracterizan a nuestro continente. Un caso significativo es el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) operado por la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas (DGCPIU) de la Secretaría de Cultura de México. Este programa, además de ofertar una gran cantidad de espacios de encuentro y de reflexión académica, financia más de 1000 proyectos culturales por año y, de esa manera, garantiza un fortalecimiento efectivo de las capacidades de gestión en el nivel local.

Se perfilan así diferentes situaciones que han tenido hasta el momento una constante: los recursos de inversión provienen de los presupuestos generales de los Estados, con importantes diferencias operativas. En países como Uruguay y Colombia, se previó un impuesto sobre la utilidad líquida que generan los casinos (Uruguay) o sobre el Impuesto Nacional al Consumo (Co-



lombia) con porcentajes del 4% destinados al sector cultural. Esto tuvo como fin principal apoyar financieramente el desarrollo de acciones de salvaguardia de las manifestaciones incluidas en las Listas de la Humanidad, aunque se ha venido ampliando a otras acciones. En otros países se han constituido fondos o se prevé hacerlo. No obstante, ante el panorama de austeridad, se considera que la cooperación internacional juega un papel cada vez más preponderante que puede verse potenciado o limitado en los próximos años, por la adhesión de los países de renta media a organizaciones como la OCDE.

## **LA SALVAGUARDIA DESDE UNA PERSPECTIVA AMPLIA DE GESTIÓN PÚBLICA**

En la actualidad, el conjunto de países de América Latina reconoce que la articulación intersectorial es uno de los requisitos más importantes para hacer efectiva la salvaguardia de las expresiones, usos, saberes y sentires que convergen en los territorios nacionales. De hecho, para la sociedad civil, la salvaguardia resulta ser un proceso potencializador cuando se articula a reivindicaciones más amplias, enfocadas, por ejemplo, hacia la garantía de derechos. Esta no ha sido una tarea fácil, dado el lugar poco preponderante que suelen ocupar las instituciones culturales en la agenda política de los Estados latinoamericanos y la complejidad de la gestión pública basada en la fragmentación y especialización sectorial.

Teniendo en cuenta lo anterior, dos son los ámbitos del PCI definidos por la Convención de 2003 que los diferentes países identifican como una ventana de oportunidad para expandir el espectro de las acciones de salvaguardia y concretar articulaciones. El primero es el que tiene que ver con los conocimientos y usos ligados con la naturaleza y el universo. Aquí se han dado avances importantes en términos de legislación, por ejemplo, en Argentina, en donde la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos (2007), establece la necesidad de medir la incidencia de las acciones que implican transformación drástica de ecosistemas en el patrimonio cultural de las poblaciones afectadas. Asimismo, se señala la Ley Nacional 27.118 Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en Argentina (2014) que asigna valor

patrimonial cultural a la agricultura doméstica y propone su recuperación, conservación y divulgación, enmarcando estas acciones en su contribución a la biodiversidad, seguridad y soberanía alimentaria.<sup>2</sup> Sobresale igualmente, en términos de políticas culturales, la Política para el conocimiento, fomento y salvaguardia de las cocinas tradicionales de Colombia, que determina acciones en pro de la conservación y protección del patrimonio fitogenético y de la salvaguardia de los saberes campesinos e indígenas. Esta política se acerca a la cocina como un proceso continuo que conecta los productores rurales, los mercados como espacios de articulación entre el campo y la ciudad y los portadores de las tradiciones culinarias. En este sentido, ha generado escenarios de articulación intersectorial y de integración entre el centro y las regiones.

El segundo campo son las técnicas artesanales tradicionales. Así, países con tradiciones artesanales fuertes destacan ejercicios de recuperación de oficios. Es interesante resaltar en este punto que el campo artesanal es uno de los que encuentra mayor participación de organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, en México, en donde se ha intentado desarrollar proyectos que, además de difundir, comercializar y revalorar la producción artesanal, buscan hacer hincapié en la dimensión social y cultural de dichas piezas y, por ende, en mecanismos que dignifiquen el trabajo de los artesanos y viabilicen las tradiciones que les dan sustento.

Por su parte, el turismo, tema preponderante en América Latina, se señala aún como un campo en el que se requiere avanzar, pero después de cuidadosas reflexiones, dadas las implicaciones negativas que puede tener para los portadores su práctica indiscriminada y los múltiples intereses que convergen en este sector productivo.

A nivel internacional, ejercicios amplios de prospectiva como el que llevó a la definición de la Agenda 2030 de Objetivos del Desarrollo Sostenible en 2013, se han incorporado como metas a largo plazo, pero su implementación continúa siendo un reto, debido a las características estructurales del continente. No obstante, países como Costa Rica, que se comprometió al desarrollo de indicadores de cumplimiento de dichos objetivos, ha hecho un trabajo destaca-

---

<sup>2</sup> Esta interesante ley aún no cuenta con su órgano de aplicación que es el Consejo de la Agricultura Familiar.

do, identificando aquellos a los que contribuye explícitamente la salvaguardia del PCI y desarrollando varios proyectos en esta dirección que incluso contemplan el tema álgido de los derechos colectivos de propiedad intelectual.

Ahora bien, las posibilidades de articulación también se resaltan dentro del sector cultural. Al respecto, una ventana sumamente interesante se abre con programas como Ibercultura que, aunque se acercan más al espíritu de la Convención de 2005 que a la 2003, cruzan campos fundamentales del PCI como las artes del espectáculo.

## V. DEBATES

Como hemos podido ver a lo largo de este texto, la institucionalización del campo del PCI y el acervo de conocimientos y experiencias que han acumulado los países en la última década, han ido construyendo todo un universo de conceptos, herramientas y prácticas de gestión. A manera de síntesis, la mirada panorámica que nos ofrecen los *Estados del arte* permite identificar varios tipos de debates o de ejes de reflexión que nos indican diferentes opciones en el camino de la salvaguardia y que permiten, igualmente, enriquecer la discusión, siempre necesaria, en aras de garantizar una mejor implementación de la Convención de 2003. Con el ánimo de sintetizar, identificamos dos tipos de debates centrales, aunque no exhaustivos:

### DEBATES TÉCNICOS

**Planes de salvaguardia.** Se evidencia en los *Estados del arte* un desarrollo desigual de esta herramienta. Algunos países como Perú consideran que las acciones no han estado orientadas por la lógica de los Planes, aunque han comenzado a desarrollar experiencias exitosas en este sentido que hacen prever su desarrollo en los próximos años. Para otros, los Planes han sido considerados un paso necesario para hacer operativas las acciones de salvaguardia concertadas en los procesos de elaboración de los expedientes de las manifestaciones incluidas en las Listas de la Humanidad (Venezuela, México). Entre tanto, países como Colombia han hecho de los Planes la bandera de

su gestión, invirtiendo recursos técnicos, humanos y financieros sustanciales en procesos de acuerdo social que buscan implicar de la manera más directa posible a los portadores en su planeación y gestión. Vale la pena en este sentido, discutir de manera más amplia el lugar que tiene dicha herramienta en la implementación concreta de la Convención de 2003, si se trata de un ejercicio de largo alcance que garantiza la participación comunitaria en el campo de la cultura o si deben ser ejercicios sencillos de prospección institucional a corto y mediano plazo.

**Inventarios y sistemas de registro.** En la actualidad hay acuerdo sobre la importancia para los Estados de diseñar mecanismos de registro de las manifestaciones de su patrimonio inmaterial. En este sentido, casi todos los países cuentan con experiencias de confección de inventarios nacionales y, algunos, como Costa Rica, Venezuela y Brasil, los han convertido en una de sus experticias principales. Este último, cuenta en la actualidad con un sofisticado sistema que se va complementado progresivamente con el producto de investigaciones y de ejercicios de reflexión colectivos. No obstante, aún persisten diferentes posiciones sobre la especificidad de los inventarios, los sistemas de declaratorias y los sistemas de registro. Para algunos países hay una clara distinción entre estos conceptos. Para otros, el sistema de inventarios corresponde al sistema de declaratorias (Perú) o es un paso previo para ellas. Asimismo, se presentan divergencias en cuanto al nivel de participación que requieren los inventarios. En Cuba, el Consejo Nacional de Casas de Cultura ha realizado acciones importantes para procurar la participación, mientras que, en Colombia, los inventarios los realizan los grupos y comunidades, sin una necesaria implicación por parte de las instituciones locales responsables de cultura en el proceso de elaboración. Un último tema de discusión es el alcance del registro, si puede considerarse como un mecanismo que contribuya al reconocimiento de los derechos de propiedad colectiva (tema en el que han avanzado algunos gobiernos como el de Perú y Costa Rica) o no tiene efectos de esta naturaleza.

**Definiciones de la Convención en otros instrumentos nacionales.** El lenguaje del campo institucional del PCI, como todo lenguaje técnico, requiere de cierta estandarización, aun cuando la Convención de 2003 se ha caracte-

rizado por ser un instrumento particularmente flexible en cuanto al margen de interpretación que deja a los países en función de sus contextos particulares y sus posibilidades institucionales. Para algunos países es tema de preocupación la diversidad de significados que otorgan los instrumentos legales y regulatorios a los conceptos de la Convención de 2003. Para otros, es importante fomentar el espíritu de la Convención en una red amplia de instituciones, más allá de los formalismos de las definiciones.

## DEBATES DE ENFOQUE

**El propósito amplio de la salvaguardia.** Como mandato de la Convención de 2003 y orientación de sus directrices, los países han venido consolidando diferentes herramientas de política cultural que han requerido que las instituciones responsables definan objetivos, metas y alcances que concreten el compromiso con la salvaguardia. La elaboración de leyes, políticas y otros instrumentos se ha inscrito también en el marco de debates profundos que hoy señalan distintas posibilidades para los gobiernos nacionales. Uno de estos caminos es el de los derechos culturales, discusión que no es nueva en nuestro continente pero que, a la luz de las transformaciones sociales y de la ampliación de las reivindicaciones políticas, ha ganado en importancia y sigue planteando retos capitales. En términos generales, hemos transitado de un escenario que estuvo por mucho tiempo centrado en la disputa por los derechos relativos al acceso a la cultura, a otro que tiene en el reconocimiento (identitario) y en la participación sus puntos más fuertes de demanda. Esto obliga a los países a reflexionar sobre lo que significa reconocer el PCI como un derecho, camino que han venido explorando Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, algunas provincias argentinas como la del Chaco y, con mucha fuerza, México.

Otro norte posible de la salvaguardia es el que la articula a una noción de desarrollo que busca incidir en las condiciones económicas de los colectivos de portadores. El emprendimiento cultural, en sus diferentes vertientes, es el paradigma desde el cual se viene fomentando el desarrollo de actividades creativas y de oferta de servicios culturales. Aunque esta preocupación tampoco es nueva, como tampoco lo es la necesidad imperativa de dignificar el trabajo de cientos de artesanos y artistas populares que en el continente

viven en condiciones de marginalidad y pobreza, pareciera que, en muchos países, los marcos de acción del emprendimiento y de la salvaguardia transitan caminos paralelos que han encontrado dificultades de diálogo y articulación. Por supuesto, no se trata de opciones mutuamente excluyentes. Una política integral de salvaguardia –orientada al buen vivir o al desarrollo sostenible– tendría que considerar todas estas posibilidades en la medida en que se trata de necesidades apremiantes que coexisten en todos los países del continente y que se han venido profundizando en el presente.

Asimismo, la violencia que ha sido un lamentable factor estructural en la historia de nuestros países, también ha obligado al campo del PCI a ampliar sus marcos de sentido. Los países del Cono Sur y de América Central que han hecho de la memoria pública una herramienta sobresaliente de trámite del dolor colectivo producto de las dictaduras y de las violencias insurgentes, han abierto un debate necesario sobre el lugar del patrimonio como vehículo de reconocimiento y dispositivo de memoria. Aquí reside, a nuestro juicio, una de las aperturas con mayor potencial, en la medida en que este enfoque permite abordar el PCI desde su dimensión política e integrar a su gestión propuestas interculturales, abiertas y flexibles, que propenden por la reconciliación y que pueden incidir en la construcción de proyectos de nación más justos e incluyentes.

**Del multiculturalismo a la interculturalidad.** Las Constituciones e instrumentos jurídicos han consagrado la naturaleza pluriétnica y multicultural de los países de nuestro continente y esta conciencia de la diversidad cultural se ha ido progresivamente abriendo camino en la sociedad civil. Incluso, hoy vemos aperturas importantes en la conceptualización de la salvaguardia como un conjunto de medidas que pueden ir más allá de la manifestación misma y de sus portadores inmediatos. Por ejemplo, es el caso de la declaratoria del candombe y de su espacio sociocultural que ha contribuido a revalorizar la participación de los afrodescendientes en el Cono Sur, con miras a revertir la discriminación, apoyándose en un corpus legislativo más amplio de lucha contra la xenofobia y el racismo. No obstante, aún sigue siendo un interrogante saber cómo fortalecer los procesos democráticos que le den alcance a este reconocimiento, determinar los límites y posibilidades de la autonomía

en el marco de los Estados nacionales, de manera que las acciones afirmativas no terminen por segregar aún más a las poblaciones históricamente invisibilizadas y, sobre todo, buscar alternativas que permitan a dichas poblaciones participar, en igualdad de condiciones, de los procesos participativos de salvaguardia.

## VI. DESAFÍOS COMUNES

Para terminar, podemos identificar algunos de los retos principales que enfrenta el conjunto de países de América Latina y que pueden resumirse, a grandes rasgos, en desafíos políticos e institucionales y desafíos en materia de participación.

### **1. La implementación conjunta y articulada de las dos convenciones**

El Plan de Trabajo de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO (2016-2021) propone dos objetivos estratégicos para el sector de cultura: (1) proteger, promover y transmitir el patrimonio y (2) fomentar la creatividad y la diversidad de las expresiones culturales. El segundo eje de acción tiene como objetivo apoyar y promover la diversidad de las expresiones culturales, la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y el desarrollo de industrias culturales y creativas mediante la aplicación efectiva de las Convenciones de 2003 (patrimonio inmaterial) y la de 2005 (industrias creativas y culturales). Asimismo, herramientas que le dan alcance a estos objetivos como la Declaración de La Habana, de Surinam o el Plan de Acción de la CELAC 2014, subrayan la importancia de la cultura y de las industrias culturales para las economías nacionales y el compromiso de los Estados de promover el emprendimiento cultural, como una herramienta de conservación del patrimonio cultural y la generación de oportunidades de empleo y riqueza, de tal forma que contribuya al bienestar de los ciudadanos y al progreso de la sociedad en su conjunto.

Este postulado representa un reto concreto en términos conceptuales tanto como institucionales. En la mayoría de los países subsiste un espíritu preservacionista en las políticas patrimoniales que se explica por el importante

antecedente del folklore como paradigma previo de tratamiento de las expresiones culturales y por la preponderancia de la antropología como disciplina de legitimación del campo del patrimonio inmaterial. Aun cuando la idea del PCI como activo social empieza a abrirse camino y es el centro de algunas políticas, aún hay un largo camino por recorrer para materializar esta apuesta, pues es importante mantener una mirada crítica hacia discursos como los del emprendimiento, ya que estos no pueden aplicarse indiscriminadamente a todas las expresiones del PCI o a todos sus portadores, al mismo tiempo que se requiere avanzar en el desarrollo de enfoques novedosos que articulen cultura y desarrollo propio, en función de los contextos específicos de cada país y de cada manifestación.

## **2. La implementación de medidas de salvaguardia conjuntas**

El continente tiene un gran potencial de movilización y gestión que se ha visto ya en las declaratorias conjuntas. Este potencial puede apalancarse en figuras de integración regional como el Mercosur y la Unasur. Además, los *Estados del arte* revelan que los países han venido consolidando experticias y metodologías que pueden ser potencializadas y puestas al servicio común a través de mecanismos de cooperación sur-sur, de diálogo y de intercambio. El desarrollo de esta mirada continental, que aún requiere de ejercicios de prospección y planeación conjunta, es importante para fortalecer la capacidad de negociación en los espacios internacionales como bloque.

## **3. La coordinación intersectorial, interinstitucional y en los diferentes niveles político-administrativos**

Como se viene señalando desde los *Estados del arte* realizados en 2005, la coordinación sigue siendo un importante reto. Sin embargo, en la actualidad se registran avances, dado el fortalecimiento de la institucionalidad cultural y la existencia de espacios transitorios o permanentes de trabajo conjunto. Ahora bien, dicho fortalecimiento también ha significado el crecimiento del número de instituciones que realizan acciones de salvaguardia o que ayudan a este propósito, lo que dificulta, en la práctica, identificar horizontes y caminos comunes. Se perfila como reto para los sistemas nacionales de



cultura identificar a los diferentes actores y determinar sus competencias, experticias y posibilidades.

Aquí toma sentido uno de los principales retos que tiene la mayoría de los países y es la evaluación y seguimiento de sus acciones, programas y políticas de salvaguardia. A diferencia de lo que ocurría en 2010, hoy existen experiencias nacionales en metodologías de evaluación específicamente diseñadas para determinar los impactos y las contribuciones del PCI. Brasil ha hecho avances importantes en este sentido. Colombia construyó indicadores para los Planes de Salvaguardia y, de manera general, países como Costa Rica han avanzado en la medición de la cultura en la economía nacional. Por ello es fundamental aunar esfuerzos que permitan dar a conocer y a discutir estos insumos, en aras de avanzar conjuntamente hacia una mejor evaluación y medición del impacto del PCI en la sociedad.

#### **4. La sostenibilidad de las acciones de salvaguardia**

Este reto también sigue siendo constante en todos los países del subcontinente y se ha mostrado aún más revelador en el panorama de crisis económica y política que nos caracteriza en la actualidad. Está claro, para la mayoría de los Estados, que la sostenibilidad reviste diferentes dimensiones. Una dimensión económica, ligada a la posibilidad material de darle continuidad a las expresiones de salvaguardia y a los proyectos e iniciativas de gestión. Hay también una dimensión cultural que se enfoca en la función social de los saberes, usos, tradiciones, memorias y prácticas. Es en esta dimensión en la que más se han centrado los esfuerzos de varios países, con el desarrollo de acciones en pro de la transmisión intergeneracional y de la apropiación social. No obstante, también hay una dimensión ecológica que condiciona la sostenibilidad de ciertas expresiones a una utilización consciente de los recursos naturales, a la protección del patrimonio fitogenético y a la articulación con otros instrumentos de protección del territorio. Por esta razón, los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades de gestión deben enfocarse a estas dimensiones, de manera que se amplíe el rango de acción de las medidas de salvaguardia.

## **5. El papel de la sociedad civil y la gobernanza cultural**

Los *Estados del arte* evidencian que aun cuando existen un sinnúmero de instituciones y organizaciones no gubernamentales que están realizando valiosas acciones, estas no siempre se enmarcan en lo propuesto por la Convención de 2003, sino que actúan bajo otros marcos de referencia. De hecho, varios países concluyen que las buenas prácticas que se han desarrollado en los niveles locales se han apalancado en las iniciativas de los propios portadores y comunidades, previniendo contra la innecesaria institucionalización de ciertas prácticas consuetudinarias. El fomento de la participación de la sociedad civil deberá tener en cuenta los procesos propios, de manera que las acciones de los Estados amplíen las posibilidades de los individuos y colectivos y propongan mecanismos de estímulo que fortalezcan el ejercicio amplio de la gobernanza cultural.

## **6. Ampliar el margen de reconocimiento de las especificidades culturales**

Los *Estados del arte* muestran avances sustanciales en el reconocimiento a los pueblos originarios e indígenas, lo que se ha visto fortalecido por los instrumentos legislativos relativos a la protección de los territorios, las lenguas, los sistemas de sitios sagrados y, en general, a la promoción de la autonomía política y cultural. Asimismo, la UNESCO viene fomentando diferentes proyectos que apuntan al reconocimiento de la diáspora africana y de los legados culturales de las poblaciones afrodescendientes. No obstante, aún requerimos avanzar en el reconocimiento de los campesinos, comunidades de pescadores, Roms, poblaciones isleñas, nómades, migrantes, comunidades en aislamiento y demás grupos que, a través de sus especificidades culturales, dinamizan el universo latinoamericano. Esto implica el desarrollo de herramientas y enfoques diferenciales con la participación efectiva de estos grupos. Asimismo, en un contexto de urbanización acelerada y, en muchos casos, traumática, es importante avanzar en el trabajo de identificación, documentación y reconocimiento del PCI en contextos urbanos.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2016). *Estudio Económico de América Latina y el Caribe: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los desafíos del financiamiento para el desarrollo*. Santiago: Naciones Unidas.
- Le Quang, M. & Ramírez Gallegos, F. (2016), "Introduction au dossier Dossier. L'Équateur de Rafael Correa : transition postnéolibérale et conflictualité", *Cahiers des Amériques latines* [En línea], 83 | 2016, Publicado el 28 febrero 2017, consultado el 07 noviembre 2017. URL : <http://cal.revues.org/4447> ; DOI : 10.4000/cal.4447.
- Pajuelo, R. (2010). *Experiencias y políticas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en América Latina*. Cusco: Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina (CRESPIAL), 2010, pp.
- Svampa, M. (marzo-abril de 2017). "Cuatro claves para leer América Latina". *Nueva Sociedad* 268. consultado el 5 de noviembre de 2017. Recuperado de <http://nuso.org/articulo/cuatro-claves-para-leer-america-latina/>.

# Uma visão panorâmica da gestão do patrimônio cultural imaterial na América Latina

Luisa Fernanda Sánchez Silva<sup>1</sup>

## I. INTRODUÇÃO

Falar do patrimônio imaterial na América Latina é remetermos a um campo que vem ganhando importância nos últimos anos, tanto nas políticas públicas como nas reivindicações de diferentes atores e movimentos sociais. Evidentemente, as expressões, os usos, os significados, os saberes e o modo de sentir coletivos que hoje agrupados sob este conceito, fizeram parte integrante da megadiversidade cultural que caracteriza a América Latina desde os tempos pré-hispânicos. Os mesmos têm sido objeto de medidas de salvaguarda específicas que permitiram que os grupos humanos garantissem sua continuidade e motivassem sua adaptação às transformações do mundo moderno e aos impactos da globalização. Além disso, foram temas de estudo fundamentais para campos de expertise como o folclore e estiveram na base das reivindicações sociais que através do conceito de cultura popular, permitiram a um grande setor da população excluída e invisível disputar seu lugar simbólico em projetos clássicos de nação mestiça, elitista e urbano-cêntrica que nos caracterizaram durante boa parte de nossa existência como repúblicas independentes.

No entanto, como já foi assinalado em múltiplos lugares, ao longo dos últimos vinte anos, o conceito adquiriu concretude como um objeto generalizada de políticas públicas e é indicado como instrumento estratégica no momento de seguir para outros horizontes comuns (o desenvolvimento sustentável ou a promoção da diversidade cultural), ao mesmo tempo em que se torna um

---

<sup>1</sup> Consultora e coordenadora para a elaboração dos Estados da arte. Professora e pesquisadora do Departamento de Antropologia da Pontifícia Universidade Javeriana de Bogotá.

lugar privilegiado de análise para aqueles que questionam criticamente suas conquistas, desafios e possibilidades. Hoje, quase 15 anos após a assinatura da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, é importante olhar novamente para este campo que parece ter ganhado um importante lugar institucional e que permitiu aos diferentes países latino-americanos trabalhar em prol de suas especificidades locais, bem como reconhecer o potencial de sua unidade como continente. Esta atitude assume ainda mais relevância no panorama latino-americano atual, um panorama de grande turbulência política, de profundas desigualdades econômicas e desafios ambientais, mas no qual os grupos, coletivos, comunidades originárias, indígenas, camponeses, Garífuna, raizais, quilombolas e centenas de habitantes rurais e urbanos que dão sentido e transcendência para suas vidas através das manifestações daquilo que consideram constitutivo de sua identidade, assumiram com voz própria seu direito de desfrutar do patrimônio, assim como deram aos Estados a responsabilidade de trabalhar em conjunto para tal efeito. Como os Estados latino-americanos assumiram o desafio da salvaguarda? O que implicou em termos de ajustes a sua institucionalidade cultural? Conseguimos abrir a noção de patrimônio por tanto tempo fechada aos vestígios materiais das façanhas coloniais e do passado pré-hispânico?

O CRESPIAL considerou prioritário retomar este exercício valioso de introspecção, a fim de construir conjuntamente uma ferramenta que seja útil para políticas futuras, exercícios de projeção ou de pesquisa. Portanto, convocou-se os Núcleos Focais dos 15 países-membros para atualizar seus *Estados da arte* em matéria de gestão do patrimônio cultural imaterial, para isso os consultadores selecionados começaram a indagar nas iniciativas públicas (e, em alguns casos, privadas), nos instrumentos, nas políticas, nos planos e projetos que deram vida aos objetivos da Convenção.

Para todos aqueles atores e instituições interessadas no campo do PCI e seus desdobramentos, os *Estados da arte* do CRESPIAL são um dos produtos de maior uso e difusão em nosso continente. Eles têm a vantagem de ser ferramentas flexíveis em seu formato que vão além de relatórios de avaliação regulares solicitados pela UNESCO ou outras organizações nacionais e multinacionais. Mesmo quando se dirigem a um público amplo e não neces-

sariamente especializado, permitem uma análise um pouco mais profunda da gestão do PCI, identificando as diferentes estratégias implementadas pelos governos e instituições responsáveis, bem como pelas comunidades, grupos detentores, atores e movimentos sociais. Tal como nas diferentes oportunidades que este exercício foi realizado, os *Estados da arte* apresentados a seguir, além de reunir os últimos avanços na implementação da Convenção de 2003 e das diferentes políticas culturais que lhe deram abrangência, buscam fornecer uma leitura crítica e propositiva, aberta a analisar as possibilidades que este campo abriu. No entanto, também estão prestes a reconhecer as limitações e oportunidades de melhoria nos diferentes níveis em que o PCI tem incidência.

Pois bem, visando aproveitar ao máximo essa iniciativa, os trabalhos apresentados partiram do que já havia sido relatado nos exercícios anteriores, incorporando, por meio de recursos de síntese como as linhas do tempo, um balanço sumário da gestão do PCI em cada um dos países. Outra particularidade dos trabalhos de 2017 refere-se ao lugar analítico que foi dado a dimensão participativa dos processos. Para todos aqueles que trabalharam neste campo, uma das aprendizagens mais importantes que permitiu o conceito de patrimônio cultural imaterial é a ênfase nas comunidades, grupos e indivíduos que carregam em suas memórias e incorporam em suas práticas aqueles saberes que, conscientemente mobilizados, adquirem seu caráter patrimonial. No entanto, a participação deixou progressivamente de ser entendida como um requisito nos procedimentos técnicos que levam à realização de inventários, expedientes, fichas de registro ou projetos de documentação e pesquisa e que, em geral, se limitava ao “consentimento livre e esclarecido” ou a uma fase de socialização nos projetos. A participação é hoje em dia um campo de reivindicação como direito cultural, assim como é uma condição sine qua non para a efetiva apropriação e fortalecimento das capacidades que tentam ampliar a governança cultural da sociedade civil como um todo. Por essa razão, ainda é um desafio importante trabalhar essa noção e gerar uma análise reflexiva que nos permita entender como esse ideal foi aplicado em cada país e em que sentido se orientam as políticas e iniciativas específicas de salvaguarda.

Antes de adentrarmos na especificidade de cada país, apresenta-se a seguir um balanço geral, visando caracterizar o campo institucional do PCI latino-americano, identificar os avanços e desafios comuns que, como continente, enfrentamos na atualidade, bem como salientar alguns debates que continuam em vigor ou que são delineados à luz dos recentes avanços. Para isso, foram tomadas uma série de variáveis de contexto que nos permitem, não apenas observar um único modelo de cumprimento dos compromissos da Convenção de 2003, mas tentar ampliar nosso marco de entendimento para os cenários específicos em que cada Estado e cada Governo fez apostas individuais e implementou seus esforços institucionais. As variáveis de análise propostas pelo CRESPIAL são:

- Gestão de expressões culturais prévia à Convenção 2003
- Institucionalidade e medidas para a participação dos detentores e comunidades
- Processos políticos nacionais
- Cooperação sul-sul
- Recursos disponíveis
- Intersetorialidade

Esse balanço nutre-se das informações fornecidas pelos documentos do estado da arte elaborados durante o segundo semestre de 2017 e dos esforços dos consultores e consultoras por dar coerência a uma história longa e não isenta de tensões. Para não tornar a leitura complexa, não citaremos cada documento textualmente, mas nos limitaremos a reconhecê-los como a fonte primária da análise que apresentamos a seguir, especificando os países aos quais se referem as afirmações.

## II. A SALVAGUARDA EM RETROSPECTIVA

Antes da ratificação da Convenção de 2003 e da institucionalização do campo do PCI, todos os países da América Latina deram à promoção da cultura (em sua versão “cultura”, “popular”, nacionalista, centrada nas artes clássicas ou em uma concepção mais holística) o caráter de responsabilidade dos Estados. No entanto, essa responsabilidade materializou-se de maneira divergente. Alguns países como México, Brasil, Venezuela e Peru, fizeram da pesquisa, da promoção e do reconhecimento das expressões culturais (pré-hispânica, originárias, ameríndias, mestiças ou populares) o centro de importantes esforços estatais que tomaram a forma de política precoces, geralmente acompanhadas por um desenvolvimento significativo da antropologia, como uma aliada científica determinante e do folclore como um campo de expertise formal. É interessante, neste cenário, o caso da Bolívia, onde a política cultural centrou-se fortemente nas expressões festivas, musicais, dancísticas e orais dos povos indígenas e camponeses, em alguns momentos para reforçar um projeto nacionalista, em outros, para apoiar a transição para um modelo multiculturalista. Este fato, resultou em uma preocupação precoce em buscar mecanismos internacionais de proteção que influenciassem diretamente nas arenas globais da UNESCO, colocando no debate, desde os anos 70, o desafio de desenvolver sistemas de reconhecimento, registro ou proteção das obras-primas e a propriedade intelectual coletiva dos povos e comunidades locais. No entanto, estes avanços devem ser lidos de maneira crítica porque em muitos casos, os modelos nacionalistas fomentavam visões folclorizantes em que o PCI era concebido como um recurso da nação que tinha que ser protegido diante das apropriações indevidas, mas sem uma visão de promoção e fomento.

Em outros países, como a Colômbia e o Equador, historicamente orientados à proteção e exaltação dos vestígios excepcionais do patrimônio cultural material; essa tendência de reconhecer que o PCI deve ser uma questão importante na agenda pública dos Estados e dos Governos, remete-se ao



“giro multicultural “dos anos 90. Nesses anos a preocupação global pela diversidade cultural foi retomada e os ajustes nas Cartas Políticas permitiram, simultaneamente, consolidar a institucionalidade cultural através da criação de Sistemas Nacionais de Cultura e elevar os Institutos e Secretarias ao nível de Ministérios. Nesses países, a institucionalização do PCI foi acompanhada por uma maior circulação de bens intangíveis a partir da indústria cultural e do turismo, uma abordagem que gerou importantes desafios que ainda estão em vigor e que têm sido aprofundados.

A partir desta perspectiva diacrônica, em muitos países ressalta-se o papel das instituições setoriais ou especificamente destinadas à proteção do patrimônio cultural. Evidencia-se o papel desempenhado pelos museus e bibliotecas, mas especialmente os institutos, mostrando que a cultura fez parte importante da arquitetura institucional da América Latina, com ritmos e modalidades próprias de acordo com os contextos nacionais. Historicamente, alguns institutos foram fundamentais na formulação precoce de políticas e de ações culturais destinadas à proteção das expressões culturais tradicionais. Este é o caso da Bolívia, onde o *Instituto Boliviano de Cultura* propôs gerar políticas integradoras visando harmonizar os altos valores das culturas nativas, das heranças da miscigenação e da cultura universal. Também é o caso da Venezuela com o *Instituto Nacional de Folklore* (INAF), Guatemala com o *Instituto de Antropología e Historia* (IDAEH), Equador com o *Instituto Nacional de Patrimônio Cultural* (INPC) e Brasil com o renomado Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Além disso, é uma variável importante para entender as aplicações atuais da Convenção, a experiência anterior dos países em projetos e as iniciativas que exigiram importantes articulações com outras instituições, também os esforços do governo, a criação de redes internacionais ou acordos com organizações internacionais. Observamos este precioso precedente no Peru, através do programa do Sistema Viário Andino Qhapaq Ñan, do qual fazem parte Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia e Equador, iniciado alguns anos antes da Convenção de 2003. Também na Guatemala, com a criação do Subcentro Regional de Artesanato e Artes Populares, resultado da assinatura de um tratado internacional com a Organização dos Estados Americanos (OEA).

Os documentos apresentados permitem, também, analisar a relação entre os países e a UNESCO. Como mencionado, em casos como o da Bolívia, essa relação tem sido ativa e teve, desde o início, o que era então chamado, segundo os conceitos de folclore ou cultura popular, um núcleo central de discussão. O mesmo se aplica ao Peru, onde uma das especialistas participou do desenho final da Convenção de 2003 e na Venezuela, cujas diretrizes sobre política cultural foram logo orientadas a seguir suas recomendações. Em boa parte dos países, o relacionamento com essa organização internacional foi fortalecido com a ratificação da Convenção do Patrimônio Mundial. Além disso, países com inscrições na Lista de Obras-Primas do Patrimônio Oral e Imaterial (Equador, Colômbia, Bolívia, Guatemala, Honduras, Cuba) adquiriram uma experiência considerável na gestão dessas manifestações e na aplicação de ferramentas do patrimônio como são os inventários.

### III. A GESTÃO DO PCI NA AMÉRICA LATINA NO SÉCULO XXI

No último exercício de atualização dos *Estados da arte* publicado pelo CRESPIAL em 2010, o continente atravessava um momento histórico que revelava algumas das dissimiles formas que tinha tomado a implementação da Convenção de 2003 em termos de instrumentos normativos que haviam sido adotados, da adequação da institucionalidade às disposições do tratado internacional e, em geral, da ênfase que cada país havia dado até então aos mecanismos de salvaguarda. Embora pudéssemos argumentar que sete anos não são tempo suficiente para ver mudanças significativas, a verdade é que o cenário atual na América Latina parece tomar rumos inesperados que nos convidam a levar em consideração o contexto mais amplo no qual os governos estão implementando a Convenção de 2003.

Em primeiro lugar, a América Latina experimentou uma grande transformação na primeira década do século XXI, o que levou a uma reformulação drástica dos modelos de governo até agora vigentes. O chamado “progressismo” ou “giro à esquerda” significou que em vários países foi feita uma

aposta pelo retorno do Estado como eixo de regulação dos mercados e da redistribuição da riqueza social. Isto foi acompanhado por tentativas de revalorização dos circuitos produtivos locais e das fontes de exportação nacional de recursos naturais; de um maior compromisso por parte do Estado no respeito dos direitos sociais por meio de transferências de recursos condicionados às rendas e de um importante desenvolvimento dos mecanismos de cooperação sul-sul (Unasul, Celac, Alba), que valorizaram a construção de um espaço regional latino-americano entre outros fatores (Svampa, 2017; Le Quang e Ramirez, 2016). “Bom Viver”, “Melhor Viver” e “descolonização” foram conceitos que atravessaram os debates intelectuais e políticos, assim como as lutas sociais da época, e propuseram modos diversos, se não antagônicos, de pensar a relação entre economia, sociedade, natureza e política (Svampa de 2017: 51). Os *Estados da arte* refletem as repercussões diretas sobre a gestão do PCI que tiveram estas mudanças políticas, o que resultou em alguns países, em um compromisso explícito com o fortalecimento da interculturalidade e a autonomia (Bolívia), em uma atualização e consolidação territorial do conceito de cultura popular (Venezuela), em um aprofundamento do reconhecimento das diferentes nações (Equador) e, em outros países, como o Brasil, na democratização das políticas culturais visando o fortalecimento, em todos os níveis territoriais, da governança cultural e da participação. Nestas aberturas, o campo do PCI encontrou novas possibilidades e se posicionou como um mecanismo estratégico de reivindicação social. No entanto, nos últimos cinco anos, vários países da América Latina enfrentam uma crise política que desafia a continuidade desses processos e os localiza, na atualidade, em um momento de transição, já que significa grandes mudanças na institucionalidade e nos recursos destinados para tais fins.

Em segundo lugar, os últimos anos foram marcados por uma série de crises econômicas que vêm se aprofundando. Embora os anos 90 tenham testemunhado o “boom das commodities” em que diversas economias se favoreceram com os altos preços dos produtos primários e os Governos adotaram uma visão produtivista do desenvolvimento, a primeira década do novo milênio chegou, em alguns países, com um questionamento direto dos modelos econômicos. Contudo, além das opções ideológicas de cada Gover-

no, houve no continente uma contração no crescimento do produto interno bruto que se evidenciou de maneira heterogênea. Em 2016, de acordo com o relatório periódico apresentado pela CEPAL, foram observados dois cenários:

As economias do norte da região foram beneficiadas com o preço reduzido da energia, a recuperação de sua demanda externa e a renda proveniente de remessas, bem como por uma dinâmica inflacionária que permite a existência de certo espaço para as políticas de estímulo à demanda agregada interna. As economias do sul da região enfrentam uma importante deterioração dos termos de troca, uma menor demanda agregada externa (da China e dos parceiros intraregionais) e uma redução considerável do espaço para adotar políticas de estímulo à demanda. (2016: 16).

O setor cultural tem sido particularmente afetado por essa situação, articulada às crises econômicas e financeiras globais e a uma retórica que reconhece cada vez mais o papel revitalizante da cultura, ao mesmo tempo em que corta e limita os mecanismos, as finanças e os espaços para uma gestão eficaz. Apesar dos esforços institucionais para manter ativas as ações relacionadas à salvaguarda do PCI, na Venezuela, por exemplo, os orçamentos públicos destinados aos portfólios culturais caíram acentuadamente, com cortes que significaram uma transição de 27% do PIB a menos de 0,05%. Da mesma forma, há uma redução drástica dos recursos humanos, o que significa que, em alguns países, as instituições responsáveis têm poucas pessoas para enfrentar os compromissos da Convenção de 2003.

Esses fatores, que juntos complicam o cenário latino-americano, coexistem paradoxalmente com aberturas significativas. É o caso do México e da Argentina, onde, apesar das diferentes crises sociais e políticas, a legislação cultural viu avanços muito importantes através da adoção de uma Lei Orgânica sobre Cultura e Direitos Culturais em nível nacional no caso mexicano e na Argentina, em nível estadual. Nesses instrumentos, o PCI é objeto de um tratamento especializado, afasta-se das visões conservacionistas para comprometer-se amplamente com o reconhecimento dos direitos culturais e, não menos importante, permite campos de articulação

com outros instrumentos orientados ao desenvolvimento sustentável ou o aprofundamento da democracia.

De outro ângulo, o fortalecimento de um cenário de gestão cultural latino-americano também permitiu o aumento da cooperação sul-sul e, ao mesmo tempo, a progressiva consolidação da expertise nacional na salvaguarda do PCI. Um caso paradigmático é o da Guatemala, que demonstra progresso na gestão de apoio técnico de vários países, apelando à sua experiência na formulação de planos de salvaguarda (Colômbia), mecanismos participativos (Brasil) e a preparação de inventários. Outro cenário interessante é dado pelas declarações do Mercosul em que os países do Cone Sul consolidaram experiências importantes como a que levou à declaração da Payada em 2015 por iniciativa da Argentina, Uruguai e, posteriormente, do Chile que se incorporou em 2016.

Outra abertura tem a ver com as transições democráticas para processos de paz e reconciliação. Desde a década de 1980, países como El Salvador uniram forças para pensar na relação entre conflito, memória e patrimônio. Recentemente, no caso colombiano, o PCI e sua gestão são delineados como oportunidades históricas para redefinir os modelos da nação e reparar os tecidos sociais rotos por décadas de conflito.

Finalmente, no que se refere aos instrumentos internacionais, vários países ratificaram desde então a Convenção de 2005 sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, criando uma institucionalidade paralela ou complementar àquela que se encarrega da gestão das ações de salvaguarda. Por exemplo, na Guatemala, a ratificação de ambas as Convenções foi feita no mesmo ano (2006), razão pela qual foi criada a *Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas*, responsável por programas como a construção de políticas culturais municipais, a construção da conta satélite de cultural e o apoio à criação de empreendimentos culturais, ações que, em muitos casos, estão diretamente relacionadas com as expressões do PCI.

## IV. A SALVAGUARDA INSTITUCIONAL: AVANÇOS, PERMANÊNCIAS E TRANSIÇÕES NA IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO DE 2003

### MARCOS NORMATIVOS E INSTRUMENTOS REGULATÓRIOS

Ramón Pajuelo, em 2010, identificou três grandes tendências em matéria de políticas de patrimônio cultural imaterial:

1. A situação de um país, o Brasil, com uma experiência prévia e sólida de salvaguarda que deu origem a uma institucionalidade precoce, a mecanismos de registro e a uma articulação entre diferentes políticas culturais. Isso facilitou a transição para a adoção dos termos da Convenção de 2003 e originou em um corpus sólido de mecanismos regulatórios e normativos.
2. Os países que desenharam ou incorporaram em suas legislações culturais instrumentos de política como resultado de mudanças estruturais significativas - a adoção do multiculturalismo ou dos acordos de paz, fundamentalmente - ou a assinatura da Convenção e suas disposições (Equador, Colômbia e Bolívia).
3. Os países que tinham feito até agora importantes esforços em termos de programas e iniciativas, mas que não tinham uma política como tal ou com instituições definidas para salvaguardar o PCI (Peru, Chile, Uruguai e Paraguai).

Atualmente, mantem-se em linhas gerais, este panorama, embora com algumas mudanças, devido a que hoje, muitos outros países fortaleceram seus marcos legais e regulatórias em diferentes níveis e em função de transformações estruturais em seus modelos de governo ou então, do fortalecimento de sua institucionalidade cultural.

Geralmente, observa-se um progresso constante na incorporação do patrimônio cultural imaterial nas normas jurídicas que indicam o trânsito definitivo do paradigma do folclore, centrado na preservação e resgate cultural, em direção ao PCI. Em termos das ferramentas de política cultural, observa-se uma preeminência na formulação de leis e não de políticas, estas últimas, importantes, na medida em que permitem uma orientação mais detalhada e flexível. Apenas na Colômbia, Guatemala e Equador existem políticas ou diretrizes aprovadas por atos administrativos, a Guatemala possui o arcabouço técnico, mas a política não está ativa no momento. Pois bem, como observou o estado da arte da Argentina, as leis que derivam das Cartas Políticas estão sujeitas a atualização regular e são complementadas por um corpus de leis federais, estaduais ou municipais que, embora heterogêneas em seus propósitos e objetivos, contribuem indiretamente para gerar um contexto normativo favorável para a gestão do patrimônio cultural imaterial. Claro que, independentemente da forma precisa que tome a política cultural (leis, atos administrativos ou documentos de política) o transcendente é o horizonte de possibilidades que irá surgir, um horizonte que depende fundamentalmente da apropriação social e da relevância que esses instrumentos têm para a sociedade civil.

Assim, em quase todos os países existem esforços legislativos setoriais que resultaram em leis orgânicas ou gerais de cultura. Algumas assumem explicitamente o PCI, como no caso da Colômbia e do Equador. Neste último, a lei estabelece um regime especial do patrimônio cultural imaterial que reconhece o dinamismo e a autonomia deste tipo de patrimônio, previne contra os riscos de sua institucionalização e veda a apropriação de sua titularidade a nome de particulares. Pois bem, em outros países onde a criação do sector cultural é mais recente ou a ênfase histórica foi colocada sobre a proteção do patrimônio material, as leis ainda se referem a um conceito geral de patrimônio cultural ou usam categorias como as de “bem cultural” (El Salvador) ou “cultura popular” (Cuba). Um caso interessante é o do Uruguai, que atualmente está passando por uma reforma legislativa. Neste país, o grupo de especialistas que orienta a redação de uma nova Lei de Patrimônio, em processo desde 2016, optou pelo conceito mais genérico de patrimônio cultural após uma reflexão criteriosa. Guiados pela Declaração de Yamato de 2004, o

projeto de lei indica a dimensão imaterial como constitutiva e preeminente de toda expressão e enfatiza o vínculo com o coletivo e a construção de identidade. Evidentemente a aplicação das leis varia dependendo da estrutura de governo de cada país, quer sejam reguladas por leis gerais da república, quer sejam leis dos estados e municípios. A seguinte tipologia legislativa poderia ser aplicada para compreender o panorama geral:

- a. Países que possuem uma normativa específica para o PCI em nível local ou nacional, como Argentina (no âmbito local), Brasil, Colômbia, Equador e Guatemala.
- b. Países com uma normativa geral com menção direta ao PCI como o México e a Bolívia.
- c. Países cujos regulamentos fazem uma menção indireta ao PCI, seja nas Constituições Políticas ou em instrumentos que geralmente usam o conceito mais amplo de patrimônio cultural, como a Costa Rica, Cuba, o Paraguai e a Venezuela.

Uma leitura transversal dos *Estados da arte*, à luz dessa tipologia, mostra o aumento dos instrumentos que, direta ou indiretamente, mencionam o PCI. No entanto, esses desenvolvimentos normativos são recentes, de modo que nem todos eles têm sistemas regulatórios que os tornem operacionais na prática.

Por outro lado, em boa parte do subcontinente, as leis de proteção dos povos originários e indígenas ou os documentos conceituais que os apoiam complementam o universo legislativo do PCI e lhe dá abertura. Em El Salvador, por exemplo, destaca-se a publicação de *Perfil de los pueblos indígenas en El Salvador* de 2003, como base para futuras ações de políticas públicas no campo do PCI, assim como as ordenanças municipais que fazem um reconhecimento formal dos grupos indígenas e de suas cosmovisões. Sem dúvida, a Bolívia apresenta avanços substanciais nesse sentido, promovendo a formação de governos municipais indígenas e camponeses por meio da figura das “Autonomias Indígenas Camponesas Originarias” (AIOC). Neste país, por exemplo, o Governo Autônomo Guarani Charagua Iyambae formula, executa e implementa planos, programas e projetos de proteção, conservação, recuperação, custódia e promoção da cultura Guarani no seu



território. A Colômbia também fez progressos importantes. Neste país, o Tribunal Constitucional pronunciou-se através de mais de 150 sentenças em situações conflituosas de consulta prévia e violação de direitos culturais dos grupos étnicos. Estas sentenças inspiraram a formulação da Política de Salvaguarda e comprometeram o Governo colombiano a iniciar processos participativos que resultaram, por exemplo, na recente declaração do sistema de conhecimentos tradicionais dos quatro povos indígenas que habitam a Sierra Nevada de Santa Marta, após um processo de quase uma década de articulação institucional, diálogos com os quatro povos e fortalecimento de suas autoridades tradicionais para tomada de decisões no campo do patrimônio. Nessa mesma direção, o México avançou, enfrentando o risco do desaparecimento de suas línguas indígenas.

## DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Para o período entre 2010 e o presente, foram observados avanços importantes na consolidação de uma institucionalidade nacional, na definição de regulamentos internos, bem como na tendência de concentrar as funções de proteção, promoção e formulação de políticas nos Ministérios. Em termos gerais, existem quatro modelos institucionais que respondem às particularidades de cada país e ao desenvolvimento desigual do setor cultural:

- Um modelo definido por uma instituição central (Ministério ou Secretaria), um espaço intersetorial que coordena as ações (Mesa, Comissão ou Conselho) e uma instituição (Instituto) que assume algumas funções precisas. É o caso da Argentina, do Brasil e do Equador, que também possuem um sistema nacional de cultura em diferentes níveis políticos e administrativos que determina a arquitetura institucional e permite uma ação descentralizada. A Colômbia também poderia estar entre os países que operam sob este modelo, embora o sistema nacional de cultura ainda seja muito débil em várias regiões do país.
- Um modelo caracterizado por uma instituição central que inclui, em alguns casos, um espaço intersetorial e uma rede dispersa de instituições culturais que cumprem importantes funções de salvaguarda, embora não

necessariamente alinhadas com a Convenção. Um exemplo desse modelo é visto na Costa Rica com sua Comissão Nacional para o PCI.

- Um modelo onde existe uma instituição gestora governamental (Ministério) e duas dependências ou instituições que, na prática, são responsáveis pela gestão e desempenham importantes funções de salvaguarda. É o caso da Venezuela com o *Instituto del Patrimonio Cultural y el Centro de la Diversidad Cultural*. É também o da Guatemala com a *Dirección Técnica de Patrimonio Intangible y la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas*. Poderíamos também classificar Cuba neste modelo com o *Consejo Nacional de Casas de Cultura* e o *Consejo Nacional de Patrimonio Cultural*. Um caso interessante é o México, pois uma dependência é responsável por questões relacionadas ao patrimônio mundial e outra por salvaguarda em nível estadual. Este país, cujos espaços inter-setoriais foram transitórios, possui um sólido sistema federal de cultura que permitiu o desenvolvimento de uma grande diversidade de ações de salvaguardas descentralizadas.
- Um modelo mais simples e centralizado, no qual há uma instituição principal (Secretaria ou Ministério) que tem uma Diretoria ou Seção de Patrimônio Cultural a partir da qual a Convenção de 2003 é aplicada, muito embora encontre apoio nas redes de instituições de cultura que dependem dos governos locais. Este é o caso da Bolívia, El Salvador, Peru e Paraguai.

Assim, em alguns países, os institutos que historicamente exerciam as ações de salvaguarda, passam a ser subordinados aos Ministérios da Cultura, o que em alguns casos garante a continuidade e dá abrangência às linhas de ação (Venezuela), mas em outros, significa a redução do foco de suas ações para uma única linha: a promoção e execução de pesquisas (Equador). Em relação ao papel mais recente dos Institutos no restante da América Latina, fica claro que, no que diz respeito ao PCI como objeto de política, passamos de um quadro de ação que privilegiava a proteção (entendida, acima de tudo, como ações orientadas à pesquisa, documentação e registro) a outro que enfatiza na gestão e amplia o espectro para um conjunto abrangente de ações de posta em valor, em diferentes níveis da esfera pública.

Isso não significa que a salvaguarda não continue sendo implementada, na prática, através de uma grande variedade de instituições desconcentradas do setor cultural que, através de museus, centros culturais ou de pesquisa, promovem e executam importantes processos que excedem até mesmo a escala nacional, para se tornarem referências regionais, o que fica evidente no caso da Costa Rica, de Cuba e do México e, claro, do Brasil. Além das instituições, em nível local, destaca-se a importância dos mecanismos de apropriação descentralizados, como a *Red de Casas de la Diversidad Cultural* (Venezuela), o *Programa de Vigías del Patrimonio* (Colômbia) ou a *Red de Museos Provinciales y Municipales* de Cuba.

Um aspecto que merece destaque é que, em vários países, fica evidente a importância de definir espaços de trabalho e concertação interinstitucionais. Em alguns países, esse exercício tem sido permanente e, em outros, conjuntural. No entanto, as comissões, mesas e grupos de trabalho realizaram importantes ações de acompanhamento, monitoramento e assessoria às ações e projetos de salvaguarda (Costa Rica com a CONAPACI, por exemplo); ou proporcionaram cenários críticos de discussão sobre critérios e procedimentos (Equador com a Mesa de Trabalho entre Ministérios e o INPC e o México com o Grupo de Trabalho sobre o PCI). O importante nesses cenários é que puderam incluir vozes diferentes, além de garantir a presença da academia e de especialistas na área. Pois bem, dentro desses espaços, também há conflitos na definição de responsabilidades. Assinala-se em alguns países que as ações das comissões ultrapassam as suas competências (Costa Rica), enquanto em outros, o que está em questão é a sua composição, porque nem sempre os especialistas que as integram demonstram sensibilidade suficiente para a questão do PCI (Uruguai).

Da mesma forma, os espaços de integração política estão cumprindo um papel que vale a pena desenvolver. É o caso do Mercosul Cultural, instância que tem como função promover e divulgar os valores e tradições culturais dos Estados-partes, por meio de propostas de cooperação e coordenação no campo da cultura. Experiências conjuntas como a declaração do Tango ou o itinerário das Missões Jesuítas envolvendo a Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai permitiram o desenvolvimento de iniciativas que reque-

rem coordenação internacional e interestadual. Neste tipo de espaços são encontradas potencialidades inéditas, conceitos como o do “patrimônio fronteiro”, também desenvolvido no Uruguai, por meio de um registro de 29 manifestações na região de Cerro Largo, que se focou, fundamentalmente, nos ofícios tradicionais.

O relacionamento com os escritórios ou instituições que atuam em nome da UNESCO, também pode ser objeto de uma análise comparativa. No entanto, deve-se especificar que, devido a que esta instituição atua nos setores de educação, ciência e cultura, não funciona da mesma maneira em todos os países. Em casos como o da Costa Rica, sede do Escritório Regional da Unesco para a América Central, destacam-se os esforços orientados a coordenar com as instituições estatais a realização de inventários, pesquisas ou treinamentos. Na Venezuela, o Escritório Técnico de Enlace com a UNESCO (OTEU) guiou a implementação e realizou o monitoramento dos planos de salvaguarda. Na Argentina, a Comissão Argentina Nacional para a UNESCO (CONAPLU), que depende do Ministério de Educação e não do Ministério da Cultura, adiantou ações de coordenação como a definição de uma agenda de trabalho conjunta com a *Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales* do Ministério da Cultura para a preparação dos expedientes. Em compensação, países como o México, mesmo quando se reconhece o trabalho fundamental da *Dirección del Patrimonio Mundial* na implementação de todas as disposições e acordos da UNESCO, esta relação nem sempre foi harmoniosa, porque surgem divergências diante da autonomia de tais escritórios ou instituições e diante dos critérios técnicos para proceder com as inclusões nas Listas.

## **MECANISMOS DE SALVAGUARDA FREQUENTEMENTE UTILIZADOS**

Nos últimos anos, a maioria dos países aceitou as diretrizes da UNESCO e aceitou o desafio de incorporar uma visão integral da salvaguarda muito mais focada no fortalecimento das capacidades e a garantir a participação das comunidades detentoras, do que no reconhecimento institucional de manifestações isoladas. No entanto, isso foi feito progressivamente.

As declarações continuam sendo o mecanismo que mais apropriações têm na sociedade civil, já que na maioria dos casos foi o mais promovido pelos Estados; mas, por sua vez, é o que apresenta maiores dificuldades em termos de gestão. Essa apropriação das declarações começa a ser visível nos âmbitos locais, de modo que países como o México, que concentraram seus esforços nas sete manifestações incluídas na Lista da Humanidade, têm hoje 56 declarações em nível estadual. Por sua vez, a Colômbia também viu o desenvolvimento de Listas representativas em nível estadual, com 37 declarações em um único estado (Santander), contra 21 na Lista representativa do PCI nacional. A Bolívia é o país com mais notoriedade, com 139 declarações, 39 delas localizadas em La Paz. Estes desenvolvimentos devem ser cuidadosamente analisados, uma vez que, nem todos os casos respondem ao espírito da Convenção de 2003 nem aos critérios estabelecidos pelas políticas no âmbito nacional. De fato, diante das declarações, os *Estados da arte*, desde 2005, indicaram continuamente sua instrumentalização política, assim como as dificuldades ligadas à falta de rigor técnico, situações que são reforçadas pela multiplicidade de instituições que têm esta competência e pela impossibilidade de encontrar meios de coordenação entre elas.

Como mecanismo de salvaguarda, são-lhe próprios os inventários e/ou sistemas de registro, um tema que os países investiram recursos significativos. Além do Brasil, que é um caso emblemático, em muitos casos foram feitos inventários para as manifestações que entraram a fazer parte do programa Obras-primas e posteriormente das Listas da Humanidade, o que reforçou a experiência dos países na pesquisa das manifestações. Da mesma forma, países como Brasil, Cuba, México, Peru e Venezuela possuem importantes acervos documentais que complementam os sistemas digitais para os quais as pessoas podem contribuir. Outro avanço são as metodologias, que foram definidas e aprimoradas com base na experiência adquirida. Este foi o caso de El Salvador e da Colômbia, este último, um exemplo de uma aposta importante para fazer dos inventários processos próprios de pesquisa com ênfase no potencial comunicativo que têm os resultados desse olhar profundo sobre o universo cultural de cada uma das expressões.

De uma perspectiva mais ampla, encontramos ações de salvaguardas orientadas à conscientização, documentação, criação de espaços de diálogo, reconhecimento, promoção e difusão.

## **FORTALECIMENTO DE CAPACIDADES EM NÍVEL LOCAL, ESTADUAL E NACIONAL**

Após uma década de gestão do patrimônio cultural imaterial e um primeiro momento dedicado à apropriação dos conceitos e ferramentas da Convenção de 2003, vários dos países hoje demonstram uma maior consciência da necessidade de fortalecimento de capacidades. Em alguns países, a ênfase foi colocada no fortalecimento do âmbito nacional para a salvaguarda e, para isso, recorreram a outras instituições nacionais ou aos organismos de cooperação internacional. A Costa Rica, por exemplo, beneficiou-se do Processo de Fortalecimento Institucional, sob a responsabilidade do Instituto Centro-Americano de Administração Pública (ICAP) que permitiu formular um modelo de gestão institucional do PCI visando estabelecer padrões de gestão, fortalecer a plataforma de informação e trabalhar sobre os critérios para as declarações. Esse tipo de fortalecimento institucional ampliou seu escopo por meio da consolidação da cooperação sul-sul, que resultou em oficinas, ciclos de formação e intercâmbio de especialistas, tratados diretamente pela UNESCO ou por meio de instituições nacionais. O CRESPIAL desempenhou um papel decisivo nesse sentido, tornando-se uma plataforma para comunicar experiências e intercambiar conhecimentos sobre o PCI fronteiriço e/ou compartilhado.

Outros fizeram esforços significativos para dar concretude ao objetivo de garantir maior autonomia e fortalecer as possibilidades reais de governança cultural. A Colômbia é um deles. Neste país foi criado desde 2011 a Estratégia de Capacidades de Gestão do patrimônio cultural imaterial, como uma forma de atribuir maior abrangência à estratégia global da UNESCO e a política nacional. Esta estratégia visa os detentores, gestores culturais, funcionários do sistema nacional da cultura e a população em geral. Atualmente conta com ferramentas virtuais (especialização e cursos) e presenciais (ciclo de 4 oficinas), assim como com uma série de materiais (uma caixa de ferramentas, uma série de exercícios de sistematização sobre opções de salvaguarda e um

manual de metodologias participativas) que permitem aos participantes apropriar-se, de forma didática, dos conceitos internacionais, bem como aplicar os seus conhecimentos através de processos próprios de pesquisa que hoje contam com uma grande coleção de publicações chamados como *PCI local*.

Por outro lado, alguns países enfocaram o fortalecimento na formação profissional, especialmente através da modalidade de cursos e pós-graduação virtuais. Na Argentina, por exemplo, aumentou a oferta de espaços de educação profissional em gestão do patrimônio, como é o caso das formações em gestão do patrimônio da Universidade Nacional de la Plata ou a Graduação em Patrimônio Cultural Latino-americano que oferece a Universidade Blas Pascal de Córdoba.

## PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA

A participação é um dos fundamentos da Convenção de 2003 e, por sua vez, um dos maiores desafios no campo do patrimônio, portanto, tempo relegado ao domínio da expertise e da intervenção externa. Rodrigo Chocano, consultor do Peru, propôs uma distinção (baseada no trabalho feito por Miguel Hernández) que pode ser útil para o resto dos países do continente e que se refere a três maneiras diferentes de entender esse mandato.

A primeira refere-se aos instrumentos e processos que são oferecidos como serviços do Estado, nos quais indivíduos, coletivos, grupos e comunidades solicitam o apoio de instituições públicas e das organizações internacionais. Os mecanismos mais importantes a este respeito são o sistema de declarações e os inventários que têm uma demanda social importante e fornecem um valorizado reconhecimento simbólico para os grupos. De acordo com os *Estados da arte*, e como já mencionamos, esse sistema, que é o mais utilizado por todos os países, embora apresente dificuldades, também mostra alguns avanços evidentes na definição de critérios técnicos para a salvaguarda pré e pós-declaração, nos espaços consultivos e na melhoria dos procedimentos de consentimento livre e esclarecido.

O segundo tipo de participação é aquele realizado por meio de projetos colaborativos entre grupos de detentores e as instituições. Neste caso, os

sistemas de financiamento desempenham um papel decisivo através dos chamamentos públicos, bem como os canais de comunicação que permitem que as instituições centrais atuem por demanda. A partir dos diferentes exercícios críticos realizados pelos países, esses tipos de processos começam a ser mais comum, como evidenciado no México, Chile, Argentina e Costa Rica.

O terceiro tipo ocorre através de projetos e iniciativas de salvaguarda liderados pelas próprias comunidades. Este é o tipo de processos que requer mais esforço. No entanto, vários países já identificam uma grande variedade de iniciativas como “boas práticas” e destacam a importância de considerar a expertise de grupos sociais como válida e significativa, o que demonstra uma maior apropriação dos conceitos e ferramentas da Convenção. O Brasil é, sem dúvida, o país que mais resultados apresenta neste modelo de participação baseado no desenvolvimento de sua política Cultura Viva. A Colômbia também fez progressos significativos nesse sentido, concentrando-se no fortalecimento das capacidades de gestão dos atores locais.

## **RECURSOS DESTINADOS À SALVAGUARDA DO PCI**

Na questão do financiamento, é difícil fazer generalizações, uma vez que os orçamentos nacionais são muito diferentes em cada caso. Da mesma forma, nos países confederados, o orçamento é distribuído e é executado através das ações das organizações que possuem competências diferenciadas, realizam atividades em seus diferentes âmbitos e acessam diferentes financiamentos. Este é o caso da Argentina, onde 87% dos estados têm financiamento próprio e, desse setor, 38,5% também recebeu contribuições financeiras do Governo nacional ou federal.

No entanto, como mencionado na primeira parte, os últimos tempos têm sido caracterizados por um cenário econômico difícil para o setor cultural, o que não impediu desenvolvimentos ou esforços significativos para manter vivas as ações das instituições responsáveis pela salvaguarda do PCI. Nesta medida, alguns países tiveram um investimento constante de recursos, especialmente quando há programas amplamente reconhecidos e que conseguem



superar as vicissitudes eleitorais que caracterizam nosso continente. Um caso significativo é o *Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias* (PACMYC) operado pela *Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas* (DGCPIU) do Ministério da Cultura do México. Esse programa, além de oferecer uma grande quantidade de espaços de encontros e de reflexão acadêmica, financia mais de 1000 projetos culturais por ano e, dessa forma, garante um efetivo fortalecimento das capacidades de gestão em nível local.

Assim perfilam-se diferentes situações que tiveram até o momento uma constante: os recursos de investimento vêm dos orçamentos gerais dos Estados, com importantes diferenças operacionais. Em países como o Uruguai e a Colômbia, foi previsto um imposto sobre os lucros líquidos gerados pelos cassinos (Uruguai) ou sobre o Imposto Nacional ao Consumo (Colômbia), com porcentagens de 4% destinadas ao setor cultural, cujo principal objetivo foi apoiar financeiramente o desenvolvimento de ações para salvaguarda das manifestações incluídas nas Listas da Humanidade, embora tenha sido entendido a outras ações. Em outros países, os fundos foram constituídos ou está previsto. No entanto, dado o cenário de austeridade, considera-se que a cooperação internacional desempenha um papel cada vez mais predominante que pode ser fortalecido ou limitado nos próximos anos, devido à adesão de países de renda média às organizações como a OCDE.

## **A SALVAGUARDA DESDE UMA PERSPECTIVA AMPLA DE GESTÃO PÚBLICA**

Atualmente, o conjunto de países da América Latina reconhece que a articulação intersetorial é um dos requisitos mais importantes para tornar efetiva a salvaguarda das expressões, usos, saberes e modos de sentir que convergem nos territórios nacionais. De fato, para a sociedade civil, a salvaguarda acaba sendo um processo potencializador quando articulada a demandas mais amplas, focadas, por exemplo, na garantia de direitos. Esta não tem sido uma tarefa fácil, devido ao lugar pouco preponderante que as instituições culturais costumam ocupar na agenda política dos Estados latino-americanos e a complexidade da gestão pública baseada na fragmentação e a especialização setorial.

Tendo em conta o acima exposto, existem dois âmbitos do PCI definidos pela Convenção de 2003 que os diferentes países identificam como uma janela de oportunidade para expandir o espectro das ações de salvaguarda e concretizar articulações. O primeiro é aquele que tem a ver com os conhecimento e usos ligados à natureza e ao universo. Com relação a este tema houve progressos significativos em termos de legislação, na Argentina, por exemplo, a Lei Nacional de Orçamentos Mínimos de Proteção Ambiental de Florestas Nativas (2007) estabelece a necessidade de medir o impacto das ações que envolvem a transformação drástica de ecossistemas no patrimônio cultural das populações afetadas. Além disso, destaca-se a Lei Nacional 27.118 Reparação histórica da agricultura familiar construção de uma nova ruralidade na Argentina (2014) que atribui valor patrimonial cultural à agricultura nacional e propõe a sua recuperação, conservação e difusão, enquadrando essas ações em sua contribuição à biodiversidade, segurança e soberania alimentar. Também se destaca em termos de políticas culturais, a Política para o conhecimento, a promoção e a salvaguarda da gastronomia tradicional da Colômbia, que determina ações em prol da conservação e proteção do patrimônio fitogenético e da salvaguarda dos saberes camponeses e indígenas. Esta política aproxima-se à cozinha como espaços de articulação entre o campo e a cidade e os detentores das tradições culinárias. Nesse sentido, gerou-se cenários de articulação intersetorial e de integração entre o centro e as regiões.

O segundo campo são as técnicas artesanais tradicionais. Assim, países com fortes tradições artesanais destacam exercícios de recuperação de ofícios. É interessante notar, neste ponto, que o campo artesanal é um dos que encontram maior participação de organizações da sociedade civil. Por exemplo, no México, onde foram feitas tentativas para desenvolver projetos que, além de disseminar, comercializar e reavaliar a produção artesanal, buscam enfatizar a dimensão social e cultural de tais peças e, portanto, em mecanismos que dignifiquem o trabalho dos artesãos e viabilizem as tradições que lhes dão sustento.

Por outro lado, o turismo, um tema preponderante na América Latina, ainda é apontado como um campo em que se requer progresso, conclui-se após

reflexões cuidadosas, dadas as implicações negativas que pode ter para os detentores sua prática indiscriminada e os múltiplos interesses que convergem neste setor produtivo.

No âmbito internacional, realizou-se exercícios abrangentes de prospectiva, como o que levou à definição da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em 2013, foram incorporadas metas de longo prazo, mas sua implementação continua sendo um desafio, devido às características estruturais do continente. No entanto, países como a Costa Rica, que se comprometeu com o desenvolvimento de indicadores em conformidade com esses objetivos, fez um excelente trabalho, identificando aqueles que contribuem explicitamente à salvaguarda do PCI e desenvolvendo vários projetos nessa direção que inclusive contemplam o tema importantíssimo dos direitos coletivos de propriedade intelectual.

Pois bem, as possibilidades de articulação também são realçadas dentro do setor cultural. A este respeito, abre-se uma janela extremamente interessante com programas como o Ibercultura que, apesar de estarem mais próximos do espírito da Convenção de 2005 do que a de 2003, permeiam campos fundamentais do PCI como as artes do espetáculo.

## V. DEBATES

Como vimos ao longo deste texto, a institucionalização do campo do PCI e o acervo de conhecimentos e experiências que os países acumularam na última década, vêm construindo todo um universo de conceitos, ferramentas e práticas de gestão. A título de síntese, a visão panorâmica oferecida pelos *Estados da arte* permite identificar vários tipos de debates ou de eixos de reflexão que indicam diferentes opções no caminho da salvaguarda e que permitem, igualmente, enriquecer a discussão, sempre necessária, a fim de garantir uma melhor implementação da Convenção de 2003. Para sintetizar, identificamos dois tipos de debates centrais, embora não sejam minuciosos:

## DEBATES TÉCNICOS

**Planos de salvaguarda.** Fica evidenciado nos *Estados da arte* um desenvolvimento desigual dessa ferramenta. Alguns países como o Peru considera que as ações não foram guiadas pela lógica dos Planos, embora tenham começado a desenvolver experiências bem-sucedidas neste sentido e fazem prever seu desenvolvimento nos próximos anos. Para outros, os Planos foram considerados um passo necessário para tornar operativas as ações de salvaguarda concertadas nos processos de elaboração dos expedientes das manifestações incluídas nas Listas da Humanidade (Venezuela, México). Enquanto isso, países como a Colômbia fizeram dos Planos a bandeira de sua gestão, investindo recursos técnicos, humanos e financeiros substanciais nos processos de acordo social que buscam implicar da maneira mais direta possível os portadores em seu planejamento e gestão. Vale a pena nesse sentido, discutir de maneira mais ampla o lugar que tem esta ferramenta na implementação concreta da Convenção de 2003, se se trata de um exercício de longo alcance que garante a participação comunitária no campo da cultura ou se devem ser exercícios simples de prospecção institucional a curto e médio prazo.

**Inventários e sistemas de registro.** Atualmente, há concordância sobre a importância para os Estados de desenhar mecanismos para registrar as manifestações de seu patrimônio imaterial. Nesse sentido, quase todos os países têm experiências em confecção de inventários nacionais, e alguns, como a Costa Rica, Venezuela e Brasil, os converteram em uma de suas principais expertises. Este último, atualmente, possui um sistema sofisticado que se complementa progressivamente com o produto das pesquisas e dos exercícios de reflexão coletiva. No entanto, ainda existem diferentes posições sobre a especificidade dos inventários, os sistemas de declaração e os sistemas de registro. Para alguns países, há uma clara distinção entre esses conceitos. Para outros, o sistema de inventário corresponde ao sistema de declarações (Peru) ou é um passo prévio para eles. Da mesma forma, existem divergências quanto ao nível de participação que requerem os inventários. Em Cuba, o *Consejo Nacional de Casas de Cultura* realizou ações importantes para assegurar sua participação, enquanto que na Colômbia, os inventários

são realizados por grupos e comunidades, sem necessariamente qualquer envolvimento das instituições locais responsáveis pela cultura no processo de elaboração. Um tópico final da discussão é o escopo do registro, se pode ser considerado como um mecanismo que contribua ao reconhecimento dos direitos de propriedade coletiva (assunto sobre o qual avançaram alguns governos, como Peru e Costa Rica) ou se não tem este propósito.

**Definições da Convenção em outros instrumentos nacionais.** A linguagem do campo institucional do PCI, como toda linguagem técnica, requer alguma padronização, mesmo que a Convenção de 2003 tenha sido caracterizada por ser um instrumento particularmente flexível quanto à margem de interpretação que deixa aos países em função de seus contextos particulares e suas possibilidades institucionais. Para alguns países, é tema de preocupação a diversidade de significados que outorgam os instrumentos legais e regulatórios aos conceitos da Convenção de 2003. Para outros, é importante promover o espírito da Convenção em uma ampla rede de instituições, independentemente das formalidades das definições.

## DEBATES DE ENFOQUE

**O propósito amplo da salvaguarda.** Como mandato da Convenção de 2003 e orientação de suas diretrizes, os países vêm consolidando diferentes ferramentas de política cultural visando que as instituições responsáveis definam objetivos, metas e escopos que traduzam o compromisso com a salvaguarda. A elaboração de leis, políticas e outros instrumentos também fizeram parte de profundos debates que hoje apontam diferentes possibilidades para os governos nacionais. Um desses caminhos é o dos direitos culturais, discussão que não é nova em nosso continente, mas que, à luz das transformações sociais e da expansão das reivindicações políticas, ganhou importância e continua apresentando desafios capitais. Em termos gerais, nos movemos de um cenário que esteve a muito tempo focado na disputa pelos direitos relativos ao acesso à cultura, a outro que tem no reconhecimento (identitário) e na participação seus pontos mais fortes de demanda. Isso obriga os países a refletir sobre o que significa reconhecer o PCI como um direito, caminho

que vem explorando a Bolívia, o Brasil, a Colômbia, o Equador, alguns estados argentinos como o Chaco e, com muita força, o México.

Outra direção possível da salvaguarda é aquela que articula uma noção de desenvolvimento que procura influenciar nas condições econômicas dos coletivos de detentores. O empreendedorismo cultural, em seus diferentes aspectos, é o paradigma a partir do qual se vem fomentando o desenvolvimento de atividades criativas e de oferta de serviços culturais. Embora esta preocupação também não é nova, como também não é a necessidade imperiosa de dignificar o trabalho de centenas de artesãos e artistas populares que vivem no continente em condições de marginalização e pobreza, parece ser que em muitos países, os marcos de ação do empreendedorismo e da salvaguarda transitam por caminhos paralelos que encontraram dificuldades de diálogo e articulação. Evidentemente, não se trata de opções mutuamente excludentes. Uma política integral de salvaguarda - orientada ao bem viver ou ao desenvolvimento sustentável, teria que considerar todas estas possibilidades, porquanto se trata de necessidades urgentes que coexistem em todos os países do continente e que estão aprofundando-se no presente.

Da mesma forma, a violência que tem sido um lamentável fator estrutural na história de nossos países, também obrigou o campo do PCI a expandir seus marcos de sentido. Os países do Cone Sul e da América Central, que tornaram a memória pública uma excelente ferramenta para lidar com a dor coletiva causada pelas ditaduras e pela violência insurgente, abriram um debate necessário sobre o lugar do patrimônio como veículo de reconhecimento e dispositivo de memória. Aqui reside, em nossa opinião, uma das aberturas com maior potencial, na medida em que esta abordagem permita abordar o PCI a partir de sua dimensão política e integrar à sua gestão propostas interculturais, abertas e flexíveis que promovam a reconciliação e possam incidir na construção de projetos de nação mais justos e inclusivos.

**Do multiculturalismo à interculturalidade.** As constituições e instrumentos jurídicos consagraram a natureza pluriétnica e multicultural dos países do nosso continente e esta consciência da diversidade cultural foi expandindo-se gradualmente abrindo caminho na sociedade civil. Ainda hoje ve-

mos importantes aberturas na conceptualização da salvaguarda como um conjunto de medidas que podem ir além da própria manifestação e de seus detentores imediatos. Por exemplo, no caso da declaração do candomblé e seu espaço sócio-cultural que contribuiu para valorizar a participação de afro-descendentes no Cone Sul, com vista à reverter a discriminação, com base em um corpus legislativo mais amplo de combate à xenofobia e ao racismo. No entanto, continua sendo um interrogante saber como fortalecer os processos democráticos que dão espaço para esse reconhecimento, determinar os limites e as possibilidades da autonomia no âmbito dos Estados nacionais, de modo que as ações afirmativas não terminem segregando ainda mais as populações historicamente invisibilizadas e, acima de tudo, buscar alternativas que permitam que essas populações participem, em igualdade de condições, dos processos participativos de salvaguarda.

## VI. DESAFIOS COMUNS

Para concluir, podemos identificar alguns dos principais desafios enfrentados por todos os países da América Latina e que podem ser resumidos, em linhas gerais, em desafios políticos e institucionais e em desafios em termos de participação.

### **1. A implementação conjunta e articulada das duas convenções**

O Plano de Trabalho de Cultura para a América Latina e o Caribe da UNESCO (2016-2021) propõe dois objetivos estratégicos para o setor de cultura: (1) proteger, promover e transmitir o patrimônio e (2) fomentar a criatividade e a diversidade das expressões culturais. O segundo eixo de ação visa apoiar e promover a diversidade das expressões culturais, a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial e o desenvolvimento de indústrias culturais e criativas por meio da aplicação efetiva das Convenções de 2003 (patrimônio intangível) e de 2005 (indústrias criativas e culturais). Da mesma forma, ferramentas que atendem a esses objetivos, como a Declaração de La Havana, de Suriname ou o Plano de Ação da CELAC 2014, ressaltam a importância da cultura e das indústrias culturais para as economias nacionais e o compromisso

dos Estados de promover o empreendedorismo cultural, como ferramenta para a conservação do patrimônio cultural e a geração de oportunidades de emprego e riqueza, de modo a contribuir para o bem-estar dos cidadãos e o progresso da sociedade como um todo

Este postulado representa um desafio concreto tanto em termos conceituais como institucionais. Na maioria dos países subsiste um espírito preservacionista nas políticas patrimoniais que é explicado pelo importante antecedente do folclore como um paradigma prévio de tratamento das expressões culturais e pela preponderância da antropologia como disciplina de legitimação do campo do patrimônio imaterial. Embora a ideia do PCI como um bem social começa a abrir caminho e é o centro de algumas políticas, ainda há um longo caminho a percorrer para materializar esta aposta, por isso é importante manter um olhar crítico sobre discursos como os do empreendedorismo, pois estes não podem ser aplicados indiscriminadamente a todas as expressões do PCI ou a todos os seus detentores, ao mesmo tempo que se necessita avançar no desenvolvimento de novas abordagens que articulem cultura e desenvolvimento próprio, dependendo dos contextos específicos de cada país e de cada manifestação.

## **2. A implementação de medidas de salvaguarda conjuntas**

O continente tem um grande potencial de mobilização e gestão que já foi visto nas declarações conjuntas. Esse potencial pode ser alavancado em figuras de integração regional como o Mercosul e a Unasul. Além disso, os *Estados da arte* revelam que os países vêm consolidando expertise e metodologias que podem ser fortalecidos e colocados em serviço comum por meio de mecanismos de cooperação sul-sul, de diálogo e de intercâmbio. O desenvolvimento desse olhar continental, que ainda requer de exercícios de prospecção e planejamento conjunto, é importante para fortalecer a capacidade de negociação nos espaços internacionais como bloco.

## **3. A coordenação intersetorial, interinstitucional e nos diferentes níveis político-administrativos**

Como foi indicado nos *Estados da arte* realizados em 2005, a coordenação continua sendo um importante desafio. No entanto, na atualidade são re-



gistrados avanços, devido ao fortalecimento da institucionalidade cultural e a existência de espaços transitórios ou permanentes de trabalho conjunto. Evidentemente, esse fortalecimento também significou o crescimento do número de instituições que realizam ações de salvaguarda ou que auxiliam esse objetivo, o que dificulta, na prática, a identificação de horizontes e caminhos comuns. Emerge como um desafio para os sistemas nacionais de cultura identificar os diferentes atores e determinar suas competências, expertise e possibilidades.

Aqui, toma sentido um dos principais desafios da maioria dos países que é a avaliação e o monitoramento de suas ações, programas e políticas de salvaguarda. Ao contrário do que aconteceu em 2010, hoje existem experiências nacionais em metodologias de avaliação especificamente projetadas para determinar os impactos e as contribuições do PCI. O Brasil fez um progresso importante nesse sentido. A Colômbia construiu indicadores para os Planos de Salvaguarda e, de maneira geral, países como a Costa Rica avançaram na medição da cultura na economia nacional. Por essa razão, é essencial combinar esforços para tornar esses insumos conhecidos e discutidos, a fim de avançar juntos em direção a uma melhor avaliação e mensuração do impacto do PCI na sociedade.

#### **4. A sustentabilidade das ações de salvaguarda**

Este desafio também permanece constante em todos os países do subcontinente e tem sido ainda mais revelador no panorama de crise econômica e política que nos caracteriza atualmente. Está claro para a maioria dos Estados que a sustentabilidade tem dimensões diferentes. Uma dimensão econômica, ligada à possibilidade material de dar continuidade às expressões de salvaguarda e aos projetos e iniciativas de gestão. Há também uma dimensão cultural que se concentra na função social dos saberes, usos, tradições, memórias e práticas. É nessa dimensão que os esforços de vários países têm se concentrado mais, com o desenvolvimento de ações a favor da transmissão intergeracional e da apropriação social. No entanto, há também uma dimensão ecológica que condiciona a sustentabilidade de certas expressões a uma utilização consciente dos recursos naturais, à proteção do patrimônio

fitogenético e à articulação com outros instrumentos de proteção territorial. Por esta razão, os esforços para fortalecer as capacidades de gestão devem concentrar-se nestas dimensões, de modo a ampliar o âmbito de ação das medidas de salvaguarda.

### **5. O papel da sociedade civil e a governança cultural**

Os *Estados da arte* mostram que, embora existam inúmeras instituições e organizações não-governamentais que estão realizando ações valiosas, elas nem sempre se enquadram no proposto pela Convenção de 2003, mas atuam sob outros quadros de referência. De fato, vários países concluem que as boas práticas que foram desenvolvidas em níveis locais foram alavancadas nas iniciativas dos próprios detentores e comunidades, impedindo a institucionalização desnecessária de certas práticas consuetudinárias. A promoção da participação da sociedade civil deverá levar em conta os próprios processos, para que as ações dos Estados ampliem as possibilidades dos indivíduos e coletivos e proponham mecanismos de estímulo que fortaleçam o amplo exercício da governança cultural.

### **6. Ampliar a margem de reconhecimento das especificidades culturais**

Os *Estados da arte* mostram avanços substanciais no reconhecimento dos povos originários e indígenas, fortalecidos por instrumentos legislativos relacionados à proteção dos territórios, das línguas, dos sistemas de lugares sagrados e, em geral, à promoção da autonomia política e cultural. Além disso, a UNESCO tem promovido diferentes projetos que visam reconhecer a diáspora africana e os legados culturais das populações afrodescendentes. No entanto, ainda precisamos avançar no reconhecimento dos camponeses, comunidades de pescadores, *Roms*, populações insulares, nômades, migrantes, comunidades isoladas e outros grupos que, através de suas especificidades culturais, dinamizam o universo latino-americano. Isso implica o desenvolvimento de ferramentas e abordagens diferenciadas com a participação efetiva desses grupos. Da mesma forma, em um contexto de urbanização acelerada e, em muitos casos, traumática, é importante avançar no trabalho de identificação, documentação e reconhecimento do PCI em contextos urbanos.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2016). *Estudio Económico de América Latina y el Caribe: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los desafíos del financiamiento para el desarrollo*. Santiago: Naciones Unidas.
- Le Quang, M. & Ramírez Gallegos, F. (2016), "Introduction au dossier Dossier. L'Équateur de Rafael Correa : transition postnéolibérale et conflictualité", *Cahiers des Amériques latines* [En línea], 83 | 2016, Publicado el 28 febrero 2017, consultado el 07 noviembre 2017. URL : <http://cal.revues.org/4447> ; DOI : 10.4000/cal.4447.
- Pajuelo, R. (2010). *Experiencias y políticas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en América Latina*. Cusco: Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina (CRESPIAL), 2010, pp.
- Svampa, M. (marzo-abril de 2017). "Cuatro claves para leer América Latina". *Nueva Sociedad* 268. consultado el 5 de noviembre de 2017. Recuperado de <http://nuso.org/articulo/cuatro-claves-para-leer-america-latina/>.

# A Panoramic View of the Intangible Cultural Heritage in Latin America

By Luisa Fernanda Sánchez Silva<sup>1</sup>

## I. INTRODUCTION

To speak about intangible heritage in Latin America means to talk about a field which has gained significance in the last few years. This can be seen both in public policies and in the vindication of different social actors and movements. Now, there is an enormous amount of expressions, customs, meanings, knowledge, and collective experiences which we nowadays group under this concept. And they are all key elements in the cultural mega diversity that has characterized Latin America since Pre-Hispanic times. They have been subjected to specific safeguarding measures. All of which have allowed human groups to ensure their continuity, and to encourage their adaptation given the constant changes of the modern world and the impact of globalization. Moreover, they were fundamental topics of study in fields of expertise such as folklore. Hence, through the concept of popular culture, they were the foundations upon which large sectors of the excluded and invisible population were able to build and fight over their symbolic place in the conventional projects of our mestizo, urban-centric, elitist nations. Projects that characterized us during a considerable part of our existence as independent republics.

However, as it has been pointed out from multiple sources, the concept has gained succinctness as a widespread object of public policy in the last twenty years. It has been designated as a strategic instrument when it comes to achieving common goals (sustainable development or the promotion of cultural diversity). Likewise, it has become a privileged place of analysis for those who critically question their achievements, challenges and possibilities.

---

<sup>1</sup> Consultant and coordinator in the development of States of the Art. Professor and researcher of the Anthropology Department of the Pontifical Xavierian University in Bogota.

Today, almost fifteen years after the signing of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, it is more important than ever to turn our attention to this field. A field that seems to have gained an important institutional place, a field that has enabled Latin American countries to both work towards their specific local needs, and realize the potential of their unity as a continent. This question becomes even more relevant in the Latin American panorama of the present, a panorama of great political instability, of deep economic inequalities and environmental challenges. Nonetheless, it is also a panorama where different groups - indigenous peoples, peasants, Raizals, Palenqueros, Garifunas, and the hundreds of rural and urban inhabitants who define their lives after what they consider to be a fundamental part of their identity - have not only taken on their right of enjoying their heritage but also given the government the responsibility of working alongside them. How have the Latin American nations taken up the challenge of safeguarding? What does it imply in terms of adjustments to their cultural institutionality? Have we managed to expand the notion of heritage beyond the material remains of the colonial era and the pre-Hispanic past?

The Center for the Safeguarding of the Intangible Heritage of Latin America (CRESPIAL) considers it a priority to resume this valuable exercise of introspection. This, in order to build a tool that is useful for future policies, prospects or research exercises. That is why the Focal Centers corresponding to the 15 member countries were summoned to update their states of the art regarding the management of the intangible cultural heritage. In order to do so, a group of consultants was invited with the aim of investigating the public (and in some cases private) initiatives, the instruments, the policies, plans, and projects that gave birth to the objectives of the Convention.

To all the actors and institutions interested in the field of intangible cultural heritage (ICH), CRESPIAL's states of the art are among the most widespread and commonly used materials in our continent. They have the advantage of being flexible tools which go beyond the evaluation reports requested by the UNESCO or any other national or multinational organization. Even though they are addressed to a broad and not necessarily specialized public, they allow for a more in-depth analysis of ICH management. This is done by iden-

tifying the different strategies carried out by the governments and institutions in charge, as well as by the communities, bearer groups, actors and social movements. In the same manner as the past opportunities in which this exercise was conducted, the states of the art presented below go beyond collecting the most recent advancements in the implementation of the 2003 Convention and the cultural policies that have caught up with it. They seek to provide a critical and proactive reading, willing not only to analyze the possibilities that such field has opened but also to acknowledge the limitations and opportunities for improvement in all the different levels which ICH influences.

Now, in order to take full advantage of this initiative, the aforementioned States of the Art had their starting point in the reports of the previous exercises. And by incorporating synthesis resources such as timelines, they were able to provide a summarized balance of ICH management in each country. Another distinctive feature of the 2017 works concerns the analytical place that was given to the participatory dimension of the processes. For all of those who have worked in this field, the emphasis on the communities, groups and individuals that carry and embody such knowledge in their memories and practices, constitutes one of the most important lessons taught by the immaterial cultural heritage. The reason for this is that once such memories and practices are consciously mobilized, they achieve a patrimonial character. However, participation has progressively stopped being understood as a requirement in the technical procedures that lead to making inventories, files, registration forms or research projects that, in general, were limited to «free and informed consent”, or a phase of socialization in the projects. Participation is nowadays both a cultural vindication sphere and a *sine qua non* condition to achieve the true embracement, and true strengthening, of the competences that seek to expand the cultural governance of civil society as a whole. Because of this reason, it is still an important challenge to work on this notion. It is important to come up with a thoughtful analysis that allows us to understand how each country has implemented this ideal and how concrete safeguarding policies and initiatives can be oriented.

Before going in depth into each country's specifics, we present an overall stocktaking below. With it, we aim to characterize Latin American ICH insti-

tutional reach and to identify the advancements and common challenges that we face as a continent. We also try to point out some discussions that continue to be valid or that are outlined in the light of recent advancements. In order to do this, we took into consideration a series of context variables that allow us to widen our understanding of the specific scenarios in which each nation and government has bet upon and deployed institutional efforts. Something which goes beyond the fact of analyzing a single model regarding the compliance to the 2003 Convention agreements. Such analysis variables proposed by CRESPIAL are:

- Management of cultural expressions prior to the 2003 Convention
- Institutionalism and measures for the involvement of actors and communities
- National political processes
- South-South cooperation
- Available resources
- Intersectorality

This stocktaking has been nurtured thanks to the information provided by the State of the Art documents which were developed during the second semester of 2017 and by the consultants' efforts to provide coherence to a long history full with tension. In favor of not making the reading complicated, we will not quote each document verbatim. Instead, we will just acknowledge them as the primary source of the analysis we present hereunder. We also specify the country to which the statements refer.

## II. SAFEGUARDING IN RETROSPECT


Although all Latin American countries (before the ratification of the 2003 Convention and the institutionalizing of ICH) had taken on the responsibility of promoting culture (in its «cultured», «popular», nationalistic, centered on the classic arts version or in a more holistic conception), such responsibility

made itself a reality in various different ways. Some countries, such as Mexico, Brazil, Venezuela and Peru, made research, promotion and recognition of cultural expressions (i.e., Pre-Hispanic, indigenous, Amerindian, mestizo or popular) the center of important state efforts. Efforts that took the form of early policies, generally accompanied by a significant development of anthropology, as a determining scientific ally and of folklore as a field of formal expertise. Interestingly enough, we find the Bolivian case, where cultural policies focused emphatically on festivities, music, dances, and oral expression of indigenous peoples and peasants. This, in some cases, to reinforce a nationalist project, in others, to support the transition towards a multicultural model. This resulted in an early concern to seek international protection mechanisms. It influenced the global arena of UNESCO, since the 1970's, by kickstarting the discussion of developing systems for the exploration, registration or protection of masterpieces and the collective intellectual property of the local peoples and communities. However, these advancements must be treated with caution. In many cases, nationalist models promoted ideas about folklore in which ICH was conceived as a nation's resource that had to be protected against misappropriation, but without any plan or vision that encouraged its promotion.

Some other countries, such as Colombia and Ecuador, have been historically inclined towards the protection and exaltation of the exceptional remains of the material cultural heritage. The tendency to recognize ICH as a central issue of a nation's public agenda goes back to the "multicultural spin" of the 90's. This is when the global concern for cultural diversity is resumed. It is also when the modifications of Political Letters allowed us to simultaneously consolidate cultural institutionalization through the creation of National Systems of Culture and to raise Institutes and Secretaries to the rank of Ministries. In such countries, the institutionalization of ICH was accompanied by a greater flow of intangible goods from the cultural and tourist industries. This approach has created important challenges which are not only still in effect but that have also been deepened.

In this diachronic perspective, many countries highlight the role of sectoral or specifically destined institution for the protection of cultural heritage. The





role of museums, libraries, but specially institutes, is fairly evident, as they show that culture has always been an important part of the Latin American institutional architecture, for it has its own rhythms and methods according to national contexts. Historically, some institutes were instrumental in the early formulation of cultural policies and actions aimed at the protection of traditional cultural expressions. Such is the case of Bolivia, where the Bolivian Institute of Culture decided to create integrating policies aimed at reconciling the high values of indigenous cultures, the legacy of miscegenation, and universal culture. The same thing happens with Venezuela and the National Institute of Folklore (INAF), with Guatemala and the Institute of Anthropology and History (IDAEH), with Ecuador and the National Institute of Cultural Heritage (INPC) and with Brazil and the famous Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Likewise, it is of great importance to know about the previous experience of the countries in relation with projects and initiatives that required joint participation with other institutions, government efforts, and the creation of international networks or agreements with international organizations. The reason for this, is that they turn out to be vital in order to understand the current implementation of the Conventions. We observe a valuable precedent in Peru, through the program of the Andean Road System Qhapaq Ñan of which Argentina, Bolivia, Chile, Colombia and Ecuador are part. And which began some years before the 2003 Convention. We can see it as well in Guatemala with the creation of the Regional Sub-Center for Crafts and Popular Arts. This was the result of signing an international treaty with the Organization of American States OAS.


The presented documents also allow us to analyze the relationship between countries and UNESCO. As we mentioned before, in cases such as Bolivia, this relationship has been active and a central issue of discussion from the beginning, in what was then called folklore or popular culture. The same applies to Peru, one of whose specialists participated in the final design of the 2003 Convention. And in Venezuela, where the guidelines on cultural policy were soon oriented to follow its recommendations. The relationship between many countries and this international organization was strengthened

with the ratification of the World Heritage Convention. Similarly, the countries with entries in the List of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage (Ecuador, Colombia, Bolivia, Guatemala, Honduras, Cuba) gained considerable experience both in the management of the aforesaid expressions and in the implementation of tools such as inventories.

### III. ICH MANGEMENT IN LATIN AMERICA IN THE 21ST CENTURY

In the last update exercise of the States of the Art published by CRESPIAL in 2010, the continent was going through a historical period that revealed some of the different ways that the implementation of the 2003 Convention had taken place in terms of the normative instruments that had been adopted, of the adequacy of the institutional framework to the provisions of the international treaty and, in general, of the emphasis that each country had hitherto given to safeguarding mechanisms. Although we could argue that seven years is not enough time to see significant changes, the truth is that the current Latin American scenario seems to take unexpected turns that make us take into consideration the broader context in which governments are currently implementing the 2003 Convention.

In the first place, Latin America underwent an important transformation in the first decade of the 21st century, which led to a drastic rethinking of the government model. This rethinking is up to now in force. The so-called “progressive model» or “Pink Tide» meant that several countries made a commitment to return the State to the center of regulation of markets and of the redistribution of social wealth. This came along with attempts to revalue local circuits of production and the export of national natural resources. It was also accompanied by a greater commitment by the State, in which it would respect social rights through the transfer of resources destined to income and an important development of South-South cooperation mechanisms (Unasur, Celac, Alba) that valued the construction of a Latin American regional space, among other factors (Svampa 2017, Le Quang and Ramírez



2016). «Buen Vivir» (Well Living), «Mejor Vivir» (Better Living) and «decolonization» were concepts that endured both intellectual and political debate, as well as the social struggles of the time. They put forward various ways, if not antagonistic ones, of thinking about the relationship between economy, society, nature and politics (Svampa 2017: 51). The States of the Art reflect the direct repercussions on ICH management that these political transformations represented. On the one hand, this resulted in an explicit commitment to the strengthening of interculturality and autonomy (Bolivia), in the updating and territorial consolidation of the concept of popular culture (Venezuela), in a deepening of the recognition of the different nations (Ecuador). On the other hand, in countries such as Brazil, it resulted in the democratization of cultural policies with the aim of strengthening cultural governance and participation at all territorial levels. In such openings, the field of ICH found unprecedented possibilities and positioned itself as a strategic mechanism of social vindication. Nonetheless, during the last five years, several Latin American countries have faced a political crisis that challenges the continuity of these processes. It places them, at present time, in a moment of transition since it has involved important changes in institutionality and in the resources destined for such ends.

Secondly, recent years have been characterized by a series of economic crises which have only deepened. Although we witnessed the «commodity boom» of the 90s, in which several economies favored high prices for primary products and governments adopted a productivist vision of development, the first decade of the new millennium arrived (in some countries) along with a strong questioning regarding economic models. However, beyond the ideological choices of each government, the continent experienced a contraction in the growth of gross domestic product which was visible in a heterogeneous manner. In 2016, according to the regular report presented by ECLAC, two scenarios were noted:

“Economies in the north of the region were boosted by lower energy prices, an upturn in external demand and remittance inflows, and inflation trends that allow for a degree of policy space for stimulating domestic aggregate demand. Their southern counterparts are faced with

a major deterioration in their terms of trade, weaker external aggregate demand (from China and intraregional partners) and a significant narrowing of their room to manoeuvre in terms of opting demand-stimulus policies” (2016:16).

The cultural sector has been particularly affected by this situation due to global financial crises and a rhetoric that increasingly recognizes the revitalizing role of culture, while cutting and limiting the mechanisms, budgets and spaces for its effective management. Despite the institutional efforts to keep ICH safeguarding active, in Venezuela, for example, public budgets destined for cultural portfolios fell sharply, with cuts that meant a transition from 27% of its GDP to less than 0.05%. Similarly, there is a drastic decrease in human capital, which means that in some countries the responsible institutions have very few people to cope with the commitments of the 2003 Convention.

These elements paradoxically coexist with significant openings that make the Latin American scenario more complex. This is the case of Mexico and Argentina, where, despite the different social and political crises, cultural legislation has seen very important advancements through the adoption of an Organic Law on Culture and Cultural Rights on a national scale in the Mexican case, and in Argentina, at the provincial level. In such documents, ICH is subject to specialized treatment. It moves away from preservationist visions in order to commit itself broadly to the recognition of cultural rights, it allows fields of collaboration with other instruments which are oriented to sustainable development or the deepening of democracy.

From another point of view, the strengthening of a Latin American cultural management scenario has also enabled an increase in South-South cooperation and, at the same time, the ongoing consolidation of national expertise in ICH safeguarding. A paradigmatic case is that of Guatemala, which shows progress in the management of technical support from several countries. All of this by appealing to their experience in formulating safeguarding plans (Colombia), participatory mechanisms (Brazil) and making of inventories. Another interesting scenario is provided by the declarations of Mercosur, in which the countries of the Southern Cone have consolidated important ex-

periences such as the one that led to the declaration of the Payada in 2015 at the initiative of Argentina, Uruguay and, later, Chile, which joined in 2016.

Another opening has to do with democratic transitions towards peace and reconciliation processes. Since the 80s, countries like El Salvador have joined forces to think about the relationship between conflict, memory and heritage. Recently, in the Colombian case, ICH and its management are presented as historic opportunities to redefine the models of nation and repair a social fabric torn apart by decades of conflict.

Lastly, regarding international instruments, several countries ratified the 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. With this, they created a parallel or supplementary institutional structure to the one in charge of managing the actions of safeguarding. In Guatemala, for example, the ratification of both Conventions was made in the same year (2006), which is why the General Board for Cultural Development and the Strengthening of Cultures was created. It is responsible for programs such as the construction of municipal cultural policies, the making of the satellite account for culture, and the creation of cultural ventures, efforts that are directly related to the expressions of ICH in many cases.

## IV. INSTITUTIONAL SAFEGUARDING: ADVANCEMENTS, PRESENCE, AND TRANSITION REGARDING THE IMPLEMENTATION OF THE 2003 CONVENTION

### **REGULATORY FRAMEWORKS AND INSTRUMENTS**

In 2010, Ramón Pajuelo identified three major trends in intangible cultural heritage policies:

1. The case of countries such as Brazil, which already had a previous and solid experience in safeguarding. This gave rise to early institutionalism, registration mechanisms, and the collaboration between different cultural policies. As a result, the transition towards the adoption of the 2003 Convention frameworks went smoothly and resulted in a solid body of regulatory mechanisms.
2. Countries that designed or added policy instruments into their cultural legislation. This as a result of major structural changes - as the adoption of multiculturalism or peace agreements, basically - or because of signing the Conventions and its provisions (Ecuador, Colombia and Bolivia).
3. Countries that had previously made important efforts in terms of programs and initiatives but that did not have a clear policy or specific institutions in charge of ICH safeguarding (Peru, Chile, Uruguay and Paraguay).

Nowadays, the outlook has remained almost the same. There have been, however, some changes because there are many more countries that have strengthened their legal and regulatory frameworks in various levels. All of it, either in terms of structural transformation in their models of government or because of the strengthening of its cultural institutionalism.

In general, there is continuous progress in the inclusion of intangible cultural heritage in legal regulations. This shows the definitive transition from the paradigm of folklore - centered on reviving and preserving culture - to that of the ICH. In terms of cultural policy tools, this results in the tendency of formulating laws instead of policies, the latter being important, insofar as they allow a more detailed and flexible orientation. Only Colombia, Guatemala and Ecuador have Policies or guidelines approved by administrative acts. However, in Guatemala, despite having the necessary technical scaffolding, the Policy is not active at this time. Now, as indicated by the Argentinian state of the art, the laws that come from the Political Letters are subject to periodic updating, and they are supplemented by a corpus of federal, regional or departmental laws. All of which, despite having different purposes and objective, indirectly contribute to generating a favorable regulatory context for the management of intangible cultural heritage. Admittedly, beyond the exact form of

the cultural policy (laws, administrative acts, or policy documents), what is truly important is the horizon of possibilities that it conveys. A horizon that essentially depends on social embracement and its relevance to civil society.

Consequently, almost all countries have had sectoral legislative developments that have resulted in organic or general laws of culture. Some of them take on ICH explicitly, as it is the case with Colombia and Ecuador. In the latter, the law establishes a special set of rules regarding intangible cultural heritage. With them, it recognizes the dynamism and autonomy of this type of heritage, it warns against the risks of its institutionalization and vetoes the appropriation of it on behalf of individuals. However, in countries where the creation of the cultural sector is more recent or the historical emphasis has been on the protection of material heritage, the laws still refer to a general concept of cultural heritage, or they use categories such as «cultural good» «(El Salvador) or» popular culture” (Cuba). A very interesting case is that of Uruguay, which is currently going through a legislative reform. The reason of this is that the group of specialists that leads the drafting of a new Heritage Law, which is in process since 2016, chose the most generic concept of cultural heritage after thoughtful considerations. Guided by the Yamato Declaration of 2004, the bill defines the immaterial dimension as a constitutive and preeminent element of all expression, and it emphasized its link with the community and the construction of identity. Naturally, the implementation of the laws varies according to the governance structure of each country, whether governed by national or state laws. The following legislative typology can be used to understand the overall picture:

- a. Countries that have specific ICH regulations at local or national level, such as Argentina (at local levels), Brazil, Colombia, Ecuador and Guatemala
- b. Countries with general regulations and a direct mention to ICH as Mexico and Bolivia
- c. Countries whose regulations indirectly mention ICH, either in their Political Constitutions or in instruments that generally use a broader concept of cultural heritage such as Costa Rica, Cuba, Paraguay and Venezuela

A cross-reading of the States of the Art, in light of this typology, shows an increase in the instruments that directly or indirectly mention ICH. Nevertheless, such normative progress is recent. Thus, not all of them have regulatory systems to make the advancements operational in practice.

On the other hand, in great part of the subcontinent, laws protecting indigenous peoples and concept papers that underpin ICH constitute its legislative universe and open it up as well. In El Salvador, for example, the 2003 publication of the *Profile of Indigenous Peoples in El Salvador* (along with the municipal ordinances that formally recognize the indigenous groups and their worldviews), is agreed to be the basis for the subsequent public policy changes regarding ICH. Bolivia undoubtedly shows substantial progress in this regard by promoting the formation of indigenous and peasant municipal governments through the figure of «Native Peasant Indigenous Autonomy» (AIOC). Let us take the example of the Autonomous Guaraní Government Charagua lyambae which drafts, executes and implements plans, programs and projects for the protection, conservation, recovery, safeguarding and promotion of the Guaraní culture in its territory. Colombia has also made important progress. Its Constitutional Court deliberated about over 150 verdicts of conflicting situations related to prior consultation and the violation of the cultural rights of ethnic groups. These verdicts inspired the formulation of the Safeguarding Policy. They have also made the Colombian government start participatory processes that derived, for example, in the recent declaration of the traditional knowledge system of the four indigenous peoples that inhabit Santa Marta's Sierra Nevada. This was achieved after a process that took almost a decade of institutional collaboration, dialogue with the four peoples, and the strengthening of their traditional authorities for decision-making in the patrimonial sphere. Mexico has also proceeded towards this same direction, due to the risk of its indigenous languages disappearing.

## **INSTITUTIONAL DEVELOPMENT**

From 2010 to present time, we have observed significant advancements concerning the strengthening of national institutionalism, the definition of internal regulations, and the tendency of focusing policy protection, promotion,



and design on Ministries. In general terms, there are four institutional models that respond to the distinctive features of each country and the unequal development of the cultural sector:


- One model is defined by a central institution (Ministry or Secretariat), an intersectoral space that coordinates activities (Bureau, Commission or Council) and an institution (institute) that takes on precise tasks. Such is the case of Argentina, Brazil, and Ecuador. Countries that also have a national system of culture in various political and administrative levels, something that determines institutional architecture and that allows decentralized action. Colombia could also be considered to be among the countries that work under this model, although the national system of culture is still very weak in several regions.
- Another model is defined by a central institution which has - in certain cases - an intersectoral space, and a scattered network of cultural institutions that fulfill important safeguarding roles, although they may not necessarily be in alignment with the Convention. An example of this can be seen in Costa Rica, which has a National Commission focused on ICH.
- The third model is defined by a governing institution (i.e. Ministry) and by two branches or organizations that, in practice, are responsible for managing and carrying out important safeguarding functions. Such is Venezuela's case, with its Cultural Heritage Institute and the Center for Cultural Diversity. The same happens in Guatemala with its Technical Directorate of Intangible Heritage and the General Directorate of Cultural Development and the Strengthening of Cultures. We could also relate Cuba to this model with its National Council of Houses of Culture and the National Council of Cultural Heritage. Mexico represents an interesting case, where one branch is in charge of everything related to the world heritage and the other is in charge of safeguarding at state level. Mexico possess a solid federal system of culture, despite having temporary intersectoral spaces, that has allowed the development of a great diversity of decentralized safeguarding actions.

- The fourth model is a simpler and more centralized one. There is a main institution (Secretariat or Ministry) which has a Department or Division of Cultural Heritage. From it, the 2003 Convention is implemented, although they find support with the networks of cultural institutions that depend on local governments. Such is the case of Bolivia, El Salvador, Peru, and Paraguay.

In some countries, therefore, institutions that had executed safeguarding efforts for years became subordinated to Ministries of Culture. This, guaranteed the continuity and expanded the reach of such efforts in some cases, as it is that of Venezuela. In other cases, as that of Ecuador, it meant reducing its efforts to a single course of action: the promotion and execution of research. Regarding the most recent role of Institutes in the rest of Latin America, it is quite evident that, concerning ICH as a subject of policy, we went from a framework of action that emphasized protection (which is to be understood as research, documentation and registration-oriented efforts) to another that emphasizes management and broadens the spectrum to a comprehensive set of actions in different areas of the public sphere.

However, this does not discredit the safeguarding which continues to be executed by a large variety of decentralized cultural institutions. All of which; through museums, cultural or research centers; promote and carry out significant efforts that exceed the national scale and become regional referents. This is specially clear in Costa Rica, Cuba, Mexico, and of course Brazil. In addition to the institutions, at local levels, it is important to highlight the value of decentralized mechanisms of embracement, such as the Network of Houses of Cultural Diversity (Venezuela), the Heritage Watch Program (Colombia) or the Network of Provincial and Municipal Museums of Cuba.

Now, one aspect we need to underline is the importance of establishing workspaces and interinstitutional agreements. As we have seen in many countries. In some of them, this exercise has held a permanent status, in some others, it has been occasional. Nonetheless, the committees, roundtables, and working groups have carried out relevant follow-up, monitoring and advisory safeguarding operations (Costa Rica with CONAPACI, for example);



they have provided critical scenarios for discussing criteria and procedures (Ecuador with the Working Table between Ministries and INPC, and Mexico with the Working Group on ICH). What is most important about these scenarios, it is that we were able to include different voices, as well as guaranteeing the presence of the academy and field experts. That said, there are also problems when defining responsibilities in such environments. In some countries, the operations of the committees surpass their responsibilities (Costa Rica), while in others, their mere structure is debatable. This is due to the fact that sometimes the experts that make up such committees show insufficient sensitivity regarding ICH (Uruguay).

Likewise, spaces of political integration fulfil a role worth developing. This is the case of the cultural Mercosur, an organization whose function is to promote the cultural values and traditions of the Member States through proposals for cooperation and coordination in the field of culture. Joint efforts as the declaration of Tango or the Jesuit Missions Tours (involving Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay, and Uruguay) have allowed the development of initiatives that require international and interdepartmental or interprovincial coordination. In this type of arenas we find unprecedented potential and concepts such as the border patrimony. It was developed in Uruguay via an exercise of registration (of 29 manifestations in the department of Cerro Largo) that was basically focused on traditional trades.

The relationship with the offices or institutions that act on behalf of UNESCO can also be the subject of a comparative analysis. However, we have to clarify that, since this institution works in the educational, scientific, and cultural sectors, it operates differently in each country. In cases such as Costa Rica, the headquarter of the Unesco Regional Office for Central America, we highlight the efforts aimed at inventorying, researching or training alongside state institutions. In Venezuela, OTEU (Technical Liaison Office with UNESCO) has implemented and monitored safeguarding plans. In Argentina, the Argentinian National Commission for UNESCO -CONAPLU- (which reports to the Ministry of Education and the Ministry of Culture), has coordinated a timetable of joint work with the National Office of Cultural Assets and Sites of the Ministry of Culture. By contrast, in countries such as Mexico this relationship

has not always been harmonious. Although we acknowledge the crucial work done by the World Heritage Directorate in the implementation of the set of provisions and agreements of UNESCO, what happens is that there has been divergence regarding both the autonomy of these offices or institutions and the technical criteria used for List inclusions.

## **FREQUENTLY USED SAFEGUARDING MECHANISMS**

In recent years, most countries have accepted both UNESCO's guidelines and the challenge of incorporating a comprehensive vision of safeguarding. A vision that is much more focused on capacity building and ensuring communal participation instead of the institutional recognition of isolated manifestations. Nevertheless, this has been done in a gradual manner.

The declarations continue to be the most widely adopted mechanism in civil society since, in most cases, it has been the most promoted one by the countries. But, at the same time, declarations come with the greatest difficulties in terms of management. This embracement is now visible at local levels, so that countries like Mexico, which had focused their efforts on the seven elements included in the List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, today have 56 elements at state level. Colombia has also experienced a growth in representative Lists at departmental level. They now have 37 elements in a single department (Santander), in comparison with the 21 elements of the national ICH representative List. We can see this in Bolivia particularly, with 139 elements, and 39 of them located in La Paz. Now, these advancements should be analyzed carefully, since they do not always correspond to the spirit of the 2003 Convention, or to the criteria established by the policies at a national level. In fact, regarding the declarations, the States of the Art have continually pointed out (since 2005) their political instrumentalization, as well as the difficulties linked to the lack of technical rigor. Difficulties which are boosted by the great variety of institutions in the field, and by the inability of finding means of coordination among them.

As safeguarding mechanisms, inventories or registration systems follow declarations. A topic in which countries have invested significant resources. And besides the emblematic case of Brazil, several inventories were made for the manifestations that later became part of the Masterpieces program and the Lists of Humanity. This strengthened each country's experience in the investigation of elements. Likewise, countries such as Brazil, Cuba, Mexico, Peru, and Venezuela have important document archives that supplement the digital systems to which people can contribute. With respect to methodologies, they constitute an advancement, which has been defined and improved based on the accumulated experience. Such has been the case of El Salvador and Colombia. Now, the latter symbolizes a model of commitment. That is because Colombia took inventories and made them part of their own research processes with an emphasis on the communicational potential of the results of such deep look at the cultural universe of each expression.

From a broader perspective, we find safeguarding efforts aimed at raising awareness, documenting, creating spaces for dialogue, recognition and promotion.

## **STRENGTHENING CAPACITIES AT LOCAL, PROVINCIAL, AND NATIONAL LEVELS:**

After a decade of managing intangible cultural heritage, and at a first stage devoted to the embracement of the concepts and tools presented in the 2003 Convention, several countries now show a greater sense of awareness regarding the need of capacity building. Some other countries have focused on strengthening national levels of safeguarding. So they have turned to other national institutions or international cooperation agencies. Costa Rica, for example, benefited from the Institutional Strengthening Process, under the responsibility of the Central American Institute of Public Administration (ICAP), which made it possible to formulate a model of ICH institutional management. All of it with the aim of establishing management standards, strengthening the information platform and working on the criteria for declarations. This type of institutional reinforcement has strengthened its reach through the consolidation of South-South cooperation. As a result, workshops, training

cycles and exchange of specialists have been arranged directly by UNESCO or through national institutions. CRESPIAL has played a decisive role in this regard since it has become a platform for communicating experiences and sharing knowledge about borderline or shared ICH.

Others have made important efforts to materialize the goal of guaranteeing greater autonomy and strengthening the real possibilities of cultural governance. Colombia is one of them. There, the Skill Management Strategies for Intangible Cultural Heritage was born in 2011. It was created as a way to address both UNESCO's global strategy and national policies. This strategy is aimed at bearers, cultural managers, officials of the national culture system, and population in general. It currently has virtual (as a diploma program and a course) and on-site tools (as a 4 workshops cycle). It also has a series of materials (a toolbox, a series of systematization exercises on safeguarding options, and a manual of participatory methodologies) that allow participants not only to adopt international concepts in a didactic way but to apply their knowledge through their own research processes which now have a large collection of publications known as local ICH to nurture them.

Now, some countries have focused their efforts towards vocational training, particularly through the modality of virtual and postgraduate courses. In Argentina, for example, the supply of professional learning spaces in heritage management has increased. This can be seen with the trainings in heritage management provided by the National University of La Plata or the diploma program offered by the Blas Pascal University in Cordoba.

## **COMMUNITY PARTICIPATION**

Participation is one of the cornerstones of the 2003 Convention. And, simultaneously, it is one of the biggest challenges in the field of heritage. One that for a very long time was relegated to the domain of expertise and external intervention. Rodrigo Chocano, a Peruvian consultant, proposed a distinction (based on the work done by Miguel Hernández) that can be useful for the rest of the countries in the continent. It refers to three different ways in which such mandate has been implemented.

The first way refers to the instruments and processes that are offered as state services. Services in which individuals, groups and communities request the support of public institutions and international organizations. To this effect, the most important mechanisms are the declaration system of the inventories which have an important social demand and symbolic recognition for the groups. According to the States of the Art, and as we have already mentioned, this system (which is one of the most widely used by the majority of countries and despite involving difficulties), shows advancements in the definition of technical criteria regarding pre- and post-declaration safeguarding, in the development of consultation forums, and in the improvement of free and informed consent procedures.

The second way of participation is the one carried out through collaborative projects between bearer groups and institutions. Crowdsourcing fulfills a determining role as well as the communication channels that allow the central institutions to act on demand. Based on the various critical exercises carried out by the countries, this type of processes start being more common (as evidenced in Mexico, Chile, Argentina, and Costa Rica).

The third way has place through projects and safeguarding initiatives led by the communities themselves. This is the type of process that requires momentum. However, several countries already identify a great variety of initiatives as «good practices.» They highlight the importance of considering the expertise of social groups as valid and significant, which demonstrates a greater embracement of the concepts and tools of the Convention. Brazil is undoubtedly the country that shows the most progress in this regard, based on the development of its Cultura Viva policy. Colombia has also made significant advancements by focusing on strengthening the management capacities of local actors.

## **ALLOCATED RESOURCES FOR ICH SAFEGUARDING**

Regarding funding, it is difficult to generalize since national budgets are very different in each case. Moreover, in confederate countries, the budget is dis-

tributed through the actions of organizations that have distinct responsibilities, work at different levels, and access different funding. Such is Argentina's case, where 87% of the provinces have their own financing, and 38.5% of them have also received financial contributions from the national or federal government.

However, as we mentioned in the first part, recent years have been marked by a difficult economic scenario for the cultural sector. That said, it has not prevented significant developments or efforts to keep the actions of the institutions responsible for ICH safeguarding alive. To that extent, some countries have constantly invested their resources. Particularly when they have programs that are widely recognized and that manage to overcome the electoral vicissitudes that characterize our continent. A significant case is the Support Program for Municipal and Community Cultures -PACMYC- run by the General Department of Popular, Indigenous, and Urban Cultures -DGCPIU- of the Secretariat of Culture of Mexico. This program, besides offering a large number of meeting and academic spaces, finances over 1000 cultural projects per year. And with them, it guarantees an effective strengthening of management capacities at local level.

We can see then, various situations that have had a single constant: investment resources come from general state budgets, and with significant operational differences. In countries such as Uruguay and Colombia, a tax was imposed on casinos' net profits (Uruguay) or on the National Consumption Tax (Colombia), with percentages of 4% destined to the cultural sector. The main reason for this was to provide financial support to the development of projects meant to safeguarding the elements included in the Lists of Humanity. Although such financial support has been extended to other ends. Other countries have either set up funds or they are planning to. However, given the austerity outlook, it is considered that international cooperation plays an increasingly dominant role that might be strengthened (or weakened) by middle-income countries joining organizations such as the OECD in future years.



## SAFEGUARDING FROM A BROAD PERSPECTIVE OF PUBLIC MANAGEMENT

Nowadays, Latin American countries recognize that intersectoral collaboration is one of the most important requirements for the effective safeguarding of expressions, customs, knowledge, and experiences that converge in national territories. In fact, safeguarding is an encouraging process for civil society when it is combined with broader vindications focused on, for example, guaranteeing civil rights. This has not been an easy task given the unimportant role that cultural institutions usually play in the political agenda of Latin American countries and the complexity of public management based on sector fragmentation and specialization.

Taking this into consideration, many countries identify two specific areas of ICH (as defined by the 2003 convention) as a window of opportunity in order to expand the range of safeguarding efforts, and to arrange collaborations. The first of these areas refers to the knowledge and customs linked to nature and the universe. It is here where important progress has been made in terms of legislation. In Argentina, for example, the National Law of Minimum Budgets for the Protection of Native Forests (2007) established the need to measure the impact of actions that involve drastic transformation of ecosystems in the cultural heritage of the affected populations. Similarly, we highlight the 2014 National Law 27.118 for Historical Repair of Family Farming and the Construction of a New Rurality in Argentina. Such law attributes cultural heritage value to domestic agriculture, proposes its recovery, conservation, and spreading by framing these actions in its contribution to biodiversity, food security and sovereignty<sup>2</sup>. The Policy for Knowledge, Development and Safeguarding of Colombian Traditional Cuisine also stands out in terms of cultural policies. It defines efforts in favor of the preservation and protection of plant genetic heritage, and the safeguarding of peasant and indigenous knowledge. This Policy sees cuisine as a continuous process that connects rural producers, markets as spaces of collaboration between the countryside and the city,

---

2 This interesting Law still does not have its own enforcement body which is the Council of Family Farming

and the bearers of culinary traditions. In this sense, it has created intersectoral spaces of collaboration and integration between rural and urban areas.

The second area refers to traditional crafting techniques. Thus, countries with strong artisan traditions emphasize trade recovery exercises. Now, it is interesting to point out that craftsmanship is one of the expressions that finds the greatest participation of civil society organizations. In Mexico, for example, they have developed projects that (in addition to promoting, marketing and revaluing craftwork) seek to emphasize the social and cultural dimension of these pieces. Therefore, they also seek to emphasize mechanisms that dignify the artisans' work, and make the traditions that give them their livelihood viable.

Regarding tourism (a dominant topic in Latin America), it is still seen as a field that needs careful and thoughtful progress. The reason for this is the negative implications that indiscriminate tourism practices can have on culture bearers, and the multiple interests that converge in this economic sector.

At an international level, comprehensive future-oriented exercises (such as the one that led to the definition of the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals in 2013) have been added as long-term milestones. Their implementation, however, remains a challenge given the structural characteristics of the continent. Nonetheless, countries like Costa Rica (which committed itself to the development of compliance indicators regarding these objectives) have done an outstanding job in identifying those to which ICH explicitly safeguards, and in developing several projects that contemplate the critical topic of collective intellectual property rights.

That said, the possibilities of collaboration are also underlined within the cultural sector. In this regard, an extremely interesting window opens up with programs such as Ibercultura. Programs that, although closer to the spirit of the 2005 Convention than the one of 2003, step into fundamental fields of ICH as those of performing arts.

## V. DEBATES

As we have seen throughout this text, ICH institutionalization and the repository of knowledge and experiences that the countries have accumulated in the last decade have build a whole universe of concepts, tools and management practices. Altogether, the panoramic view offered by the States of the Art allows us to identify various types of debates or topics for reflection. All of which not only show us different options in the path of safeguarding, but also allow us to enrich the discussion in order to guarantee a better implementation of the 2003 Convention. In short, we identified two types of central (although not exhaustive) debates:

### **TECHNICAL DEBATES:**

**Safeguarding Plans.** The States of the Art show us an uneven development of this tool. Some countries, like Peru, consider that actions have not been aimed accordingly to the logic of the Plans, despite having developed successful experiences that foresee their future advancements. To others, the Plans have been a necessary step to operationalize the combined safeguarding efforts in the processes of elaboration. This, regarding the files of elements included in the Lists of Humanity (Venezuela, Mexico). Meanwhile, countries like Colombia have made of the Plans the banner of their management. They have invested substantial technical, human and financial resources in processes of social agreement that seek to involve bearers in their planning and management in the most direct possible way. In this sense, it is worthwhile to further discuss the role that such tool plays in the correct implementation of the 2003 Convention. Should it be a long reach exercise that guarantees community participation in the cultural field or a simple exercise of institutional exploration meant for the short and medium run?

**Inventories and Registration Systems** Nowadays, countries agree upon the importance of designing mechanisms for registering the elements of their own intangible heritage. In this sense, almost all countries are experienced in the preparation of national inventories. And some of them, such as Costa Rica,

Venezuela and Brazil, have made of inventories one of their main expertise. Brazil, for example, currently has a sophisticated system that is progressively supplemented with the product of research and collective reflection exercises. However, varying views still persist regarding the specificity of inventories, declaratory and registration systems. For some countries there is a clear distinction among these concepts. For others, the inventory system belongs to the declaratory system (Peru) or it constitutes a previous step of it. Correspondingly, opinions diverge regarding the level of participation required by inventories. In Cuba, the National Council of Houses of Culture has taken important steps to ensure participation. While in Colombia, the inventories are done by groups and communities without the necessary involvement of the local institutions responsible for culture. Our final topic of discussion is the scope of the entry. Can it be considered a mechanism that contributes to the recognition of collective property rights (an issue on which countries like Peru and Costa Rica have made some progress) or does it have no such effects?

**Convention Definitions and other National Instruments.** Institutional ICH argot, as any technical language, requires a certain level of standardization. This, despite the fact that the 2003 convention is characterized for being a particularly flexible instrument regarding the room for interpretation each country has according to its particular context and institutional possibilities. For some countries, the plethora of meanings given by legal and regulatory instruments to the concepts of the 2003 Convention is a matter of concern. For others, it is important to promote the spirit of the Convention in a wide network of institutions, beyond formalities of definitions.

## STANDPOINT DEBATES

**The Broad Purpose of Safeguarding.** As commanded by the 2003 Convention and guided by its principles, countries have consolidated different cultural policy tools. They have required that responsible institutions define objectives, goals and scopes to secure their commitment to safeguarding. The making of laws, policies and other instruments has also been listed in the profound debates that currently point to different possibilities for national governments. One of these paths is that of cultural rights, a discussion that despite not

being new, it has gained importance and continues to pose capital challenges (in light of social changes and the expansion of political claims). In general terms, we have moved from a scenario that had been centered (for a long time) on the dispute over the rights regarding access to culture, to another one that sees identity recognition and participation as its strongest points of demand. This compels countries to reflect on what it means to recognize ICH as a right. A path that has been explored by Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, some Argentinian provinces such as the Chaco, and, with great vigor, Mexico.

Another possible lodestar for safeguarding is the one which combines it to an idea of development that seeks to influence the economic conditions of the bearer groups. Cultural entrepreneurship, in its different aspects, is the model used to foster the development of creative activities and the supply of cultural services. This concern is not new either, nor it is the need to dignify the work of hundreds of artisans and popular artists who live in poor and marginalized conditions. However, it seems that many countries have found difficulties with respect to dialogue and collaboration in the entrepreneurship and safeguarding frameworks of action. They are not, of course, mutually exclusive options. A comprehensive safeguarding policy (oriented to good living or sustainable development) would have to consider all these possibilities. As for it deals with pressing needs that coexist all across the continent, and that have deepened in the present.

Similarly, violence has been a regrettable structural factor in the history of our countries. It has forced the ICH field to expand its frameworks of meaning. The countries of the Southern Cone and Central America have made of public memory an outstanding tool for dealing with the collective pain caused by dictatorships and insurgent violence. By this, they started a necessary debate regarding the role of heritage as a vehicle of recognition and remembrance. In our opinion, here lies one of the openings with the greatest potential. This, of course, as long as this approach allows us to tackle ICH from its political dimension and integrate intercultural, open, and flexible proposals into its management. All of which should be inclined to reconciliation, and influence the construction of fairer and more inclusive projects of nation.

**From Multiculturalism to Interculturality.** Constitutions and legal instruments have enshrined the multiethnic and multicultural nature of our continent. And cultural diversity awareness has progressively gained strength in civil society. Even today we see important openings in the conceptualization of safeguarding as a set of measures that can go beyond both its manifestation and its immediate bearers. Let us take the declaration of candombe and its socio-cultural space as an example. For it has contributed to re-valuing Afro-descendants' participation in the Southern Cone. All of it with the aim of fighting discrimination by relying on a broader legislative body of struggle against xenophobia and racism. Nonetheless, there are still some questions that remain unanswered. Firstly, how can we reinforce the democratic processes that give such recognition a major scope? Secondly, how can we determine the reach and boundaries of autonomy in the setting of a national state? Particularly, in a way in which the efforts do not segregate historically invisible populations even more. And thirdly, how do we look for alternatives that allow these invisible populations to participate in equal conditions of participatory safeguarding processes?

## VI. COMMON CHALLENGES

To conclude, we can identify some of the main challenges faced by Latin American countries. Challenges that can be broadly summarized in political and institutional ones, as well as challenges in terms of participation.

### 1. JOINT AND COLLABORATIVE IMPLEMENTATION OF THE TWO CONVENTIONS:

UNESCO Work Plan for Culture in Latin America and the Caribbean (2016-2021) proposes two strategic objectives for the culture sector: (1) protecting, promoting and transmitting heritage and (2) fostering creativity and the diversity of cultural expressions. The second main line of action is directed at supporting and promoting the diversity of cultural expressions, the safeguarding of intangible cultural heritage, and the development of cultural and

creative industries through the effective implementation of the 2003 (intangible heritage) and the 2005 Conventions (cultural and creative industries). Likewise, tools that boost these objectives (as the Declaration of Havana, the Declaration of Surinam, or the CELAC Plan of Action for 2014) stress the importance of culture and cultural industries for national economies. They also underline the countries' commitment to promote cultural entrepreneurship as a tool for the conservation of cultural heritage and the creation of employment opportunities and wealth. By doing this, they contribute to the well-being of its citizens and the development of society.

This premise represents a real challenge both in conceptual and institutional terms. In most countries there is a preservationist spirit in heritage policies. This can be explained by the important precedent of folklore as a previous model for processing cultural expressions and by Anthropology's dominance as legitimizing discipline of the intangible heritage field. The idea of ICH as a social asset is now more broadly accepted, and it is even at the center of certain policies. Yet, there is still a long way to go in order to materialize this bet. We have to keep a critical eye on speeches that cannot be indiscriminately applied to all expressions of ICH (as those of entrepreneurship) or to all its bearers. Particularly, we need to develop new approaches that combine culture and self-improvement regarding the specific context of each country and each element.

## **2. IMPLEMENTATION OF JOINT SAFEGUARDING MEASURES.**

The continent has a great rallying and management potential, which has been seen in the joint declarations. Such potential can be leveraged in figures of regional integration such as Mercosur and Unasur. In addition, the States of the Art show that countries have consolidated their expertise and methodologies, and that these can be optimized and made available for other to use through exchange, dialogue and South-South cooperation mechanisms. The development of this continental perspective, which still requires exploration exercises and joint planning, is important to strengthen our negotiation capacity in international spaces as a bloc.

### **3. INTERSECTORAL AND INTER-AGENCY COORDINATION AT DIFFERENT POLITICAL AND ADMINISTRATIVE LEVELS**

As the States of the Art have been pointed out since 2005, coordination remains an important challenge. As a result of consolidating cultural institutions, and because of the existence of provisional or permanent spaces of joint work, there is progress nowadays. However, such consolidation has also meant an increase in the number of institutions which execute safeguarding actions or that help this purpose. Now, this makes it difficult to effectively determine common horizons and paths. It is therefore a challenge, for national cultural systems, to identify the different actors and to determine their competences, expertise and possibilities.

It makes sense, then, that of the biggest challenges that countries face is the evaluation and monitoring of their safeguarding actions, programs and policies. Unlike what took place during 2010, there are, nowadays, national experiences in evaluation methodologies specifically designed to determine ICH impact and contributions. Brazil has taken important steps in this regard. Colombia built indicators for the Safeguarding Plans and, broadly speaking, countries like Costa Rica have made progress in the measurement of culture in the national economy. Thus, it is paramount to combine our efforts, and make these inputs known and discussed, in order to move forward together towards a better evaluation and measurement of the impact of ICH on society.

### **4. SUSTAINABILITY OF SAFEGUARDING EFFORTS**

This one is a persistent challenge faced by all the countries in the subcontinent. And it is now more significant given the economic and political crisis that defines us at present time. It is clear, for most of the states, that sustainability covers different dimensions. One of them is economic. It is tied to the material possibility of providing continuity to both safeguarding expressions and management projects and initiatives. There is also a cultural dimension which focus on the social function of knowledge, customs, traditions, memo-



ries and practices. It is on this dimension that several countries have focused their efforts the most, by developing actions in favor of intergenerational transmission and social embracement. However, there is also an ecological dimension that restricts the sustainability of certain expressions to a sensible use of natural resources, to the protection of plant genetic heritage, and to the collaboration with other instruments of territorial protection. Because of this, efforts to strengthen management capacities should focus on these dimensions in order to extend the range of action of safeguarding measures.

## **5. THE ROLE OF CIVIL SOCIETY AND CULTURAL GOVERNANCE**

The States of the Art show that even though there are countless institutions and non-governmental organizations currently conducting valuable actions, they do not always act within the framework of the 2003 Convention, but under other frames of reference. In fact, several countries agree that the good practices which have been developed at local levels have been leveraged on the initiatives of the bearers and communities themselves. Thus, preventing the unnecessary institutionalization of certain customary practices. The promotion of civil society's participation shall take into account its own processes. By doing so, states' efforts will be able to expand the possibilities of individuals and groups as well as resolving incentive mechanisms that strengthen the broad exercise of cultural governance.

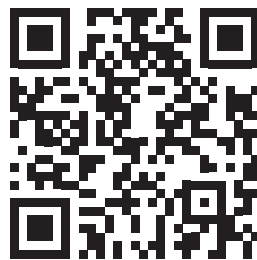
## **6. EXPANDING THE SCOPE OF RECOGNITION OF CULTURAL SPECIFICITIES**

The States of the Art show substantial progress in the recognition of native and indigenous peoples. Something which has been strengthened by the legislative instruments related to the protection of territories, languages, systems of sacred sites and, in general, to the promotion of political and cultural autonomy. Likewise, UNESCO has been promoting different projects aimed at the recognition of the African diaspora and the cultural legacies of Afro-descendant populations. However, we still need to make headway regarding the recognition of the peasants, fishing communities, Roma people,

island populations, nomads, migrants, communities in isolation and other groups that, through their cultural specificities, energize the Latin American universe. This implies the development of differential tools and approaches with the effective participation of these groups. Moreover, in a setting of rapid (and in some cases traumatic) urbanization, it is important to make progress in the job of identifying, documenting and recognizing ICH in urban contexts.

## BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

- CEPAL, 2016. "Economic Survey of Latin America and the Caribbean 2016: The 2030 Agenda for Sustainable Development and the challenges of financing for development". United nations publication
- Le Quang Matthieu and Ramírez Gallegos Frank (2016), «Introduction au dossier Dossier. L'Équateur de Rafael Correa : transition postnéolibérale et conflictualité », Cahiers des Amériques latines [Online], 83 | 2016, Published on 28 February 2017, viewed 07 November 2017. URL : <http://cal.revues.org/4447>; DOI : 10.4000/cal.4447
- Pajuelo Ramón (2010), «Experiences and policies for the safeguarding of intangible cultural heritage in Latin America», [In Spanish: Experiencias y políticas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en América Latina] State of the Art of Intangible Heritage in Latin America, Regional Center for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of Latin America -CRESPIAL-, Cusco: 2010 , pp. .
- Svampa Maristella (2017) «Four keys to reading Latin America», [In Spanish: Cuatro claves para leer América Latina] Revista Nueva Sociedad n ° 268 [Online], March-April 2017, viewed 05 November 2017. URL: <http://nuso.org/articulo/cuatro-claves-para-leer-america-latina/>



En el siguiente enlace: [www.crespial.org/estados-arte-pci](http://www.crespial.org/estados-arte-pci) (también en código QR) se encuentran un aproximado de 1000 páginas con el análisis de las Políticas del PCI de cada uno de los países miembro del CRESPIAL. Todas estas páginas no han sido impresas como parte de nuestra nueva política ambiental de disminución y uso racional de papel.





Organización  
de las Naciones Unidas  
para la Educación  
la Ciencia y la Cultura



Patrimonio  
Cultural  
Inmaterial



Centro Regional para  
la Salvaguardia del Patrimonio  
Cultural Inmaterial de América Latina  
bajo los auspicios de la UNESCO